**ENFOQUE PSICOSOCIAL Y PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS EN
LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE DE LA VIOLENCIA SEXUAL
DIRIGIDA HACIA MUJERES EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO**

GENNY ELIZABETH APRAEZ VILLAMARIN

Candidata a magíster

Directora: Liliana Rocío Chaparro Moreno

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

**MAESTRÍA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO ANTE ORGANISMOS, CORTES Y
TRIBUNALES INTERNACIONALES**

Bogotá, D.C 2016

Resumen.

La investigación propone la inclusión de aspectos del enfoque psicosocial del daño, en la realización de un reglamento técnico para la evaluación psicológica forense de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado en Colombia. Esto en vista de que los reglamentos técnicos vigentes han sido desarrollados para abordar casos relacionados con la violencia común, y se basan en el modelo tradicional de evaluación, el cual se centra en la descripción de indicadores que sugieren la presencia de enfermedad mental, lo que deja de lado la comprensión del contexto, los impactos psicosociales y de género que ocurren en la victimización.

Abstract.

The investigation proposes the incorporation of aspects of psychosocial damage in the elaboration of a forensic protocol to evaluation of the sexual violence on the internal armed conflict in Colombia.

This because the existing protocols have been developed to evaluate cases of the common violence, and they are based on the traditional model of evaluation, who centres on the description of indicators that suggest the presence of mental disorder, not in the comprehension of the context, the psychosocial impacts, and the gender impacts of the victimization.

Palabras clave: Derechos Humanos, perspectiva psicosocial, mujer, violencia sexual en conflicto armado, peritaje psicológico, reglamentos técnicos.

Keywords: Human Rights, psychosocial perspective, women, sexual violence on the Internal armed conflict, psychological forensic evaluation, forensic protocols.

Índice General

Introducción.....	8
Capítulo i	13
1. Marco jurídico de la violencia sexual en el conflicto armado.....	13
1.1 protección internacional contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado.....	15
1.2 protección contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado en el ordenamiento jurídico colombiano	19
1.2.1 criterios jurisprudenciales	24
1.3 estándares de apreciación y toma del testimonio como base de la prueba pericial en relación a la violencia sexual contra la mujer en el sistema interamericano.....	30
Capítulo ii	35
2. La prueba pericial en psicología	35
2.1 naturaleza jurídica	35
2.2 objetivos la evaluación psicológica forense y estructura del informe pericial.....	37
2.3 tipos de peritaje según sus enfoques de evaluación.....	38
2.3.1 el peritaje psicológico.....	39
2.3.2. El peritaje psicosocial.....	40
2.4 la prueba pericial en la investigación de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado	41
Capítulo iii	45

3. Impacto psicológico y psicosocial en mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado.....	45
3.1 la perspectiva psicosocial de la salud mental	46
3.1.1 la salud mental en función del contexto.....	47
3.2 el concepto de daño en la práctica psicológica forense	51
3.2.1 daño psicológico	52
3.2.2 daño psicosocial	53
3.3. Efectos de la violencia sexual en el conflicto armado	56
3.3.1 efectos psicológicos	57
3.3.2 efectos psicosociales	59
Capítulo iv	62
4. Análisis crítico de los reglamentos técnicos vigentes para la práctica psicológica forense en la evaluación de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado	62
4.1. Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes	65
4.1.1. Aspectos a destacar	66
4.1.2. Consideraciones respecto a la utilidad	69
4.2. Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses...70	
4.2.1. Aspectos a destacar	72
4.2.2 consideraciones respecto a la utilidad.....	73
4.3. Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico, con fines de indemnización, conciliación o reparación.....	74

4.3.1. Aspectos a destacar	75
4.3.2. Consideraciones respecto a la utilidad	76
4.4. Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales	77
4.4.1. Aspectos a destacar	79
4.4.2. Consideraciones respecto a la utilidad	80
4. 5. Protocolo internacional de documentación e investigación de violencia sexual en situaciones de conflicto armado	84
Capítulo v	88
5. Propuesta de lineamientos generales para desarrollar una guía de evaluación psicológica forense con enfoque psicosocial de la violencia sexual dirigida hacia las mujeres con ocasión del conflicto armado	88
5.1 objetivo de la peritación.....	88
5.2 marco normativo	89
5.3 marco conceptual	91
5.4 marco metodológico	91
5.5. Aspectos psicosociales que deben ser incluidos en el análisis de la información obtenida durante la evaluación	93
Conclusiones	96
Referencias	98

Índice de Tablas

Tabla 1. Ejes de la evaluación psicológica forense según el Protocolo de Estambul	67
Tabla 2. Ejes de la evaluación psicológica forense según el Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense	71
Tabla 3. Ejes de la evaluación psicológica forense según la Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico, con fines de indemnización, conciliación o reparación	75
Tabla 4. Ejes de la evaluación psicológica forense según guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales	78

Introducción.

El presente trabajo se trata de una investigación de tipo propositiva que tiene como objetivo recomendar los aspectos jurídicos y psicosociales que deben ser tenidos en cuenta en la construcción de un reglamento técnico para la evaluación psicológica forense con enfoque psicosocial de la violencia sexual dirigida a mujeres con ocasión del conflicto armado en Colombia.

Este objetivo parte de la hipótesis de que los reglamentos técnicos vigentes en el ámbito nacional e internacional son insuficientes para documentar adecuadamente los aspectos psicosociales del daño en la salud mental de las víctimas.

El problema jurídico se fundamenta en que actualmente el Sistema Nacional de Medicina Legal en Colombia no cuenta con un reglamento técnico preciso que oriente la realización de peritajes psicológicos en casos donde se investigue violencia sexual en situaciones de violencia sociopolítica.

La ausencia de un Protocolo especializado representa un desafío y una limitación importante para los profesionales que realizan este tipo de experticias, pues se encuentran expuestos a suscribir actuaciones periciales cuya capacidad demostrativa es insuficiente o contraria a derecho.

Los reglamentos vigentes han sido desarrollados para valorar la violencia común y se fundan sobre la base del modelo tradicional de evaluación (modelo médico), cuyo objetivo principal es documentar la presencia o ausencia de indicadores sugerentes de enfermedad o alteración mental.

El uso del modelo médico en la evaluación psicológica forense de la violencia sociopolítica, específicamente cuando se trata de violencia basada en

género, limita la comprensión del contexto posibilitador del hecho investigado y la documentación de todas las dimensiones del daño (social, familiar, comunitario, político), incluyendo los impactos diferenciados sufridos por las mujeres en razón de la violación a sus Derechos Humanos.

En Colombia, pese a los avances en materia legislativa y a la creación de unidades de Fiscalía especializadas en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, persiste aún una barrera importante para que las mujeres accedan a la justicia, esta limitante se relaciona en gran parte con la marcada insistencia en la búsqueda de la prueba física y testimonial de la víctima, en ocasiones dejando de lado medios de conocimiento como el peritaje psicológico y psicosocial, a través del cual el ente investigador puede contar con información técnico científica encaminada a: a). documentar los patrones de violencia sistemática y generalizada perpetrados por los actores armados en contra de las mujeres, b). objetivar las afectaciones sufridas por las víctimas, c). promover medidas de reparación particulares para cada caso.

Los resultados de la investigación son presentados en cinco capítulos que se exponen brevemente a continuación:

En el primero se ahonda en los principales aspectos del marco jurídico de los Derechos Humanos de las mujeres y, en especial, los Derechos Humanos de las mujeres víctimas de violencia sociopolítica que han resultado sexualmente vulneradas. Este marco legal permite establecer cuáles son los lineamientos mínimos que un reglamento técnico de evaluación de este tipo de casos debería contener.

En el segundo se abordan los aspectos generales de la prueba pericial psicológica, específicamente su naturaleza jurídica, objetivo, alcance e

importancia.

El tercer capítulo desarrolla los aspectos principales relacionados con el daño psicológico y psicosocial esperado y frecuentemente encontrado en las víctimas, con lo que se establece la importancia de la documentación concerniente al daño psicosocial, en la realización del peritaje psicológico para casos relacionados con violaciones graves a Derechos Humanos.

En el capítulo cuatro se muestran los resultados del análisis de pertinencia y suficiencia de los reglamentos técnicos vigentes para la evaluación de la violencia sexual en conflicto armado; análisis que encontró que ninguno de los instrumentos es suficiente o recomendable.

A partir de la revisión de la información contenida en los cuatro primeros capítulos del texto, se formuló un serie de recomendaciones para la construcción de una *Guía de evaluación*, de acuerdo a los estándares normativos internacionales, a las necesidades de las víctimas en virtud de sus Derechos Humanos y a la debida diligencia en la producción de la prueba pericial en la investigación judicial del caso; estas recomendaciones se contienen en el quinto capítulo de este trabajo.

Se espera que los resultados de esta investigación contribuyan a la superación de las barreras de acceso a la justicia a las que se ven enfrentadas las víctimas, ante la insuficiencia en la investigación de estos hechos, sirviendo como base para el desarrollo de un reglamento técnico para el abordaje de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

Los hallazgos contenidos en este trabajo responden a las demandas planteadas en la norma jurídica respecto a la necesidad de ampliar la perspectiva de la investigación forense a través de la introducción de nuevas

técnicas de abordaje, contribuyendo a la superación del modelo tradicional de evaluación psicológica, centrado en la búsqueda de la enfermedad mental.

La autora de la investigación cuenta con formación a nivel de posgrado en psicología jurídica y actualmente ejerce labores periciales dentro del grupo de psicología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Es precisamente en el ejercicio de la práctica profesional de la autora, que surge la motivación de realizar este trabajo de grado, pues ante el reto de elaborar peritajes psicológicos en casos relacionados con violencia sexual con ocasión del conflicto armado, fue evidente la ausencia de lineamientos claros para guiar adecuadamente la elaboración de este tipo de evaluaciones dentro el marco de los Derechos Humanos de las mujeres víctimas.

Como se mencionó al inicio de esta introducción, se trata de una investigación teórico-documental de tipo propositiva que se caracteriza por la búsqueda, recolección y análisis de información sobre el tema central de la investigación, con el fin de evaluar la pertinencia del uso de los reglamentos técnicos vigentes para la evaluación psicológica forense de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado. Esto en aras de discutir los reglamentos existentes y proponer lineamientos de actuación pericial ajustados a los Derechos Humanos de las víctimas que permitan fortalecer el sistema forense.

La investigación está compuesta por tres etapas: planeación, ejecución y síntesis. En la primera se define, plantea, describe y formula la situación problema, delimitando el tema y la población de referencia, justificando la necesidad de realizar el trabajo investigativo, para luego analizar su viabilidad; en esta etapa la revisión del estado de la cuestión permitió aproximarse al tema

y reafirmar la hipótesis de trabajo.

La segunda etapa, ejecución, se realiza a través de las tareas de recolección, organización y análisis de la información, en esta se construyen los cuatro primeros capítulos de este trabajo. Las fuentes de información son: los instrumentos del derecho internacional de los Derechos Humanos, los pronunciamientos de los organismos internacionales, el derecho interno, los reglamentos técnicos forenses nacionales e internacionales pertinentes para el tema que ocupa la investigación y la información académica desde el área de la psicología aplicada al ámbito forense.

Finalmente en la última etapa, síntesis, se construye el quinto capítulo de este trabajo, que formula la propuesta de inclusión de criterios para la construcción de un reglamento técnico forense para la evaluación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, para luego formular las conclusiones finales dando respuesta a la hipótesis de investigación y cumpliendo con el objetivo propuesto.

Capítulo I

1. Marco jurídico de la violencia sexual en el conflicto armado

El presente capítulo expone sustancialmente el referente normativo y los estándares nacionales e internacionales en materia de investigación y judicialización de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado que deben ser tenidos en cuenta dentro de la construcción de un reglamento técnico forense específico para la evaluación psicológica de este tipo de casos.

Inicialmente se precisan los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos proferidos por el Sistema Universal y el Sistema Interamericano aplicables al tema de investigación que nos ocupa; más adelante se aborda el marco jurídico colombiano y finalmente se hace alusión a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos donde se ha pronunciado respecto a la violación de los Derechos Humanos de las mujeres en razón de la ofensa sexual con ocasión de violencia sociopolítica.

Para dar inicio a este texto es importante señalar que el cuerpo de las mujeres continuamente es instrumentalizado como arma de guerra, puesto que:

[...] el conflicto armado es un contexto que alienta a las partes en disputa a ejecutar conductas victimizantes en aras de controlar a la población, castigarla, obtener ganancias militares, eliminar o desplazar un grupo étnico o religioso. (Sarmiento, Perea, Rojas, Apráez, y Berenguer, 2013, p.22).

El reconocimiento de la comunidad internacional en cuanto a la necesidad de proteger a la mujer contra toda forma de discriminación ha exigido la promulgación de instrumentos normativos concretos en el ámbito del derecho

internacional público, haciendo por intermedio de estos, un llamado a los Estados a velar por la garantía de los Derechos Humanos de las mujeres: respetándolos, protegiéndolos y haciéndolos realidad.

En el caso de Colombia, de acuerdo a lo manifestado en el artículo 93 de la Constitución de 1991, el derecho internacional se incorpora en el derecho interno a través del bloque de constitucionalidad, obligando al Estado colombiano a cumplir con los compromisos pactados en cada instrumento ratificado.

En el ámbito de la protección de los Derechos Humanos de las mujeres, y en especial de las mujeres víctimas en situaciones de conflicto armado, el Estado colombiano ha ratificado instrumentos en el Sistema Universal, el Sistema Interamericano, la jurisdicción penal internacional y el Derecho Internacional Humanitario, destacándose principalmente: el Pacto internacional de derechos civiles y políticos; el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW; la Convención americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (*Belem do Pará*); el Convenio IV de Ginebra; el Protocolo I y II adicionales a los convenios de Ginebra, y finalmente, el Estatuto de Roma, entre otros.

Cada instrumento incorpora elementos que permiten ampliar la comprensión de los Derechos Humanos de las mujeres víctimas, como se muestra a continuación.

1.1 Protección internacional contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado

El Pacto internacional de derechos civiles y políticos, el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales y la Convención americana de Derechos Humanos llaman al Estado a garantizar, respetar y proteger los Derechos Humanos de los hombres y las mujeres sin distinción de sexo, previniendo y prohibiendo cualquier forma de discriminación en razón del mismo.

Esto cobra relevancia al analizar la violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado, pues el derecho a no sufrir discriminación se deriva del reconocimiento de la dignidad inherente a la persona, por ende, no puede ser suspendido o inadvertido en el contexto de la confrontación bélica, máxime cuando la violencia basada en género ha sido reconocida internacionalmente como una forma de discriminación (Tamayo y Díaz, 2006. p. 52).

Estos instrumentos obligan también a los Estados a velar por la debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de toda violación a Derechos Humanos, con el fin de combatir la impunidad y garantizar el derecho de las víctimas a disponer de recursos eficaces para la obtención de justicia y reparación (Tamayo, Díaz, 2006. p. 58).

Para ser precisos en este punto, la debida diligencia se trata de uno de los estándares más importantes sobre la prevención e investigación de la violencia contra la mujeres; hace referencia al deber que tienen los Estados de “adoptar medidas positivas para impedir la violencia y proteger a la mujer, castigar a los autores de actos violentos e indemnizar a las víctimas de la violencia” conforme

a las obligaciones contenidas en los tratados de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 2006. p. 2).

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL (2013), ha señalado que en relación con la debida diligencia en la investigación de la violencia de género (en particular cuando se trata de violencia sexual), el Estándar debe satisfacer los mínimos de oportunidad en la producción y preservación de la prueba, luego, tanto el examen médico legal como la evaluación psicológica deben ser llevados a cabo por personal idóneo, en un ambiente cómodo, seguro y privado para la víctima, minimizando toda intrusión en su intimidad y la exposición a interrogatorios reiterativos, así mismo la evaluación de las declaraciones rendidas por las mujeres víctimas debe encontrarse libre de prejuicios y estereotipos que puedan potencialmente viciar la opinión pericial (p. 50-51).

En un sentido normativo concreto, las mujeres cuentan con una protección reforzada en los Sistemas internacionales. La CEDAW y La Convención de *Belem do Pará*, enfatizan en que la violencia contra la mujer constituye una violación de sus Derechos Humanos, configurándose como una ofensa a su dignidad humana y una manifestación de discriminación que refleja la desigualdad entre hombres y mujeres.

La CEDAW, en su segundo artículo, hace un llamado a los Estados para que adopten medidas legislativas, y no legislativas para prevenir, proteger, prohibir y sancionar a través de sus instituciones toda forma de discriminación contra la mujer.

La Convención de *Belem do Pará* por su parte en su artículo primero define la violencia contra la mujer como:

[...] cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. (1994).

Esta definición abre una perspectiva ampliada de análisis de la violencia sexual fuera de los ámbitos domésticos, pues al trascender su interpretación hacia lo público, permite advertir su acontecer en escenarios como el conflicto armado.

Es precisamente el conflicto armado uno de los contextos donde la mujer goza de una protección reforzada de sus Derechos Humanos. Esto es evidente en los instrumentos que hacen parte del Derecho internacional humanitario (convenios de Ginebra), como lo veremos a continuación:

Los cuatro convenios de Ginebra destacan en su artículo número tres común, la importancia de que las personas no partícipes de las hostilidades durante el conflicto sean tratadas de acuerdo a su condición humana, prohibiendo los atentados contra la vida, integridad y dignidad personal en cualquiera de sus formas y enfatizando en que el buen trato debe darse sin distinción de criterios clasificatorios susceptibles de derivar en condiciones de discriminación, incluyendo el sexo.

El Convenio cuarto de Ginebra, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, en su título tercero, menciona que las mujeres serán especialmente salvaguardadas “contra todo atentado a su honor y en particular contra la violación, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor” (1949).

El alcance de la protección especial y reforzada a las mujeres durante la guerra se extiende en los Protocolos I y II adicionales relativos a los conflictos

armados de carácter internacional y nacional respectivamente. El Protocolo I destaca de manera algunas medidas en favor de las mujeres y niños durante la guerra al reconocer su estado de vulnerabilidad; el Protocolo II reitera la prohibición de atentar contra la dignidad personal, en especial la exposición a la violación, la prostitución forzada y hechos análogos a esta, incluyendo la amenaza de realizar dichos actos.

Finalmente, el Estatuto de Roma como instrumento del derecho penal internacional cataloga la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra según el contexto en que se presente.

Además de los instrumentos precitados existen disposiciones internacionales que también tienen carácter vinculante y son pertinentes dentro del tema que nos ocupa, estas son las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las recomendaciones del Comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer de las Naciones Unidas.

Dentro de las proferidas por el Consejo se destacan la resolución 1820 de 2008 y 1960 de 2010 relativas a las mujeres, la paz y la seguridad. En ellas el Consejo expresa su preocupación por la situación de las mujeres y niñas durante los conflictos armados y luego de la cesación de ellos. En sus partes pertinentes insta a los Estados a avanzar en la superación de la situación de los hechos y su impunidad a través de la implementación de medidas eficaces para prevenir su ocurrencia, sancionar penalmente a los responsables y garantizar el acceso a la justicia y protección legal de las víctimas, contribuyendo al restablecimiento de la paz y la seguridad internacional.

Sobre las recomendaciones proferidas por el Comité de la CEDAW se destaca la recomendación número 30 de 2013, en ella insta a los Estados a

que garanticen mecanismos judiciales para la investigación de la violencia sexual contra la mujer en el marco del conflicto armado; destaca que el Estado debe propender porque el testimonio de las víctimas sea tomado por personas de género femenino preferiblemente; resalta que las investigaciones deben emprenderse con confidencialidad y sensibilidad garantizando que durante las etapas del proceso judicial se atribuya la misma importancia al testimonio de las mujeres y las niñas que al de los hombres; hace un llamado a luchar contra la impunidad garantizando la integridad del sistema judicial, reforzando la capacidad del personal a su disposición para recabar y preservar las pruebas forenses relacionadas con la violencia sexual en contextos de conflicto y posteriores a conflictos .

Tomar en cuenta lo referido en la recomendación número 30 de 2013 es importante para los fines del tema que nos ocupa, debido a que marca un precedente que debe ser tenido en cuenta al valorar la prueba pericial psicológica practicada en este tipo de casos, pues la pericia se fundamenta predominantemente en el testimonio de las víctimas. Este punto precisamente, ha sido ampliamente desarrollado en la jurisprudencia del Sistema interamericano de Derechos Humanos como lo veremos más adelante.

1.2 Protección contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado en el ordenamiento jurídico colombiano

La violencia sexual se define como “aquella que restringe la libertad sexual de las personas, limitando su capacidad de auto determinar la conducta (Humanas, 2009, citado por Guzmán. D, 2012).

En consonancia con las obligaciones internacionales, el Estado colombiano ha incorporado disposiciones legislativas en su derecho interno, en aras de extender una especial protección a la mujer en escenarios de violencia sociopolítica.

La Ley 1448 de 2011 adoptó la definición de víctima de acuerdo a los estándares internacionales determinando que serán consideradas como tal:

[...] aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (Art. 3).

Con la adopción de Ley 975 de 2005, Colombia abrió paso a la implementación de mecanismos de justicia transicional. En sus partes pertinentes la ley hace referencia a los derechos de las víctimas, resaltando que el Estado tiene la obligación de garantizarles el acceso a la justicia dentro del reconocimiento de su condición humana, protegiendo su intimidad personal, garantizando su seguridad y promoviendo la reparación de los daños sufridos.

La Ley 1448 de 2011 centra su objeto en las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto en general, y hace referencia a los derechos de las víctimas dentro de los procesos judiciales.

En consonancia con las *Reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional* (regla número 70, principios de la prueba en casos de violencia sexual), en el artículo 38, esta Ley señala una serie de reglas específicas relacionadas con los principios de prueba e interpretación del testimonio de la víctima en casos donde se investiguen delitos que involucren

violencia sexual advirtiendo resumidamente que bajo ninguna circunstancia podrá ser inferido el consentimiento de la víctima cuando con ocasión de los hechos hayan mediado factores de abuso de poder capaces de disminuir su capacidad volitiva (amenazas, coacción, aprovechamiento de un entorno coercitivo, silencio o falta de resistencia de la víctima); tampoco habrán de realizarse juicios morales de reproche o credibilidad en contra de la víctima aludiendo a la naturaleza de su comportamiento sexual antes o después de los hechos.

En su artículo 42 la Ley se refiere a la toma del testimonio en las diferentes etapas del proceso penal, aduciendo que en los casos donde la víctima haya sido objeto de violencia sexual, tiene derecho a elegir el sexo de la persona ante la cual desea rendir declaración. Estas disposiciones contenidas en la ley son importantes para quienes asumen el rol de perito dentro del proceso, pues como se señaló previamente, la experticia se basa en la toma del testimonio de la víctima.

La Ley 1719 de 2014 surge como respuesta a la necesidad de reforzar la protección especial de personas que han sido objeto de violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

La norma modifica algunos artículos del código penal y de procedimiento penal conforme al Derecho internacional humanitario y el Derecho penal internacional, con lo que adiciona tipos penales referentes a diferentes formas de violencia sexual, que pueden ocurrir con ocasión del conflicto armado, resaltando que las víctimas son consideradas “personas protegidas”, y que los actos de violencia sexual pueden llegar a ser considerados crímenes de lesa humanidad.

Entre los tipos de violencia sexual tipificados en esta norma se incluyen: acceso carnal abusivo con menor de 14 años (Art. 2), actos sexuales con menor de 14 años (Art. 3), prostitución forzada (Art. 4), esclavitud forzada (Art. 5), Trata de personas con fines de explotación sexual (Art. 6), esterilización forzada (Art. 7), embarazo forzado (Art. 8), desnudez forzada (Art. 9) y finalmente aborto forzado (Art. 10).

Se destaca así mismo la definición de “violencia” propuesta por la Ley donde resalta que para los fines de los tipos penales previamente expuestos:

[...] se entenderá por violencia: el uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento (Art. 11).

Esta Ley establece disposiciones especiales relativas a los derechos y garantías de las víctimas de violencia sexual durante el proceso judicial, donde se incluye el sometimiento a la práctica de experticias forenses y entrevistas.

En el artículo 13 señala que debe preservarse la intimidad y confidencialidad de la información aportada por la víctima en las diferentes diligencias. Respecto al operador de justicia menciona que este siempre debe aplicar el principio de igualdad y preferiblemente contar con formación en Derechos Humanos y enfoque diferencial.

Se menciona que las víctimas no deben ser sometidas a pruebas repetitivas, como entrevistas donde deban relatar una y otra vez los hechos; esto cobra importancia dentro de los parámetros de la práctica de la prueba

pericial en psicología, pues el galeno no estaría obligado a recabar información explícita acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos si ya se cuenta con ella dentro del expediente del caso, pudiendo centrar su entrevista en el relato de la víctima respecto a la vivencia del hecho y las consecuencias del mismo, obteniendo información que le permita documentar la presencia de posibles alteraciones en la salud mental de la persona o afectaciones en su funcionamiento social, familiar y comunitario; valorando los hechos en contexto sin perjuicios contra la víctima, tal y como lo señala la Ley.

En el artículo 18 la Ley realiza algunas recomendaciones para los funcionarios judiciales en el tratamiento de la prueba, donde reiteran lo manifestado en la Ley 1448 de 2011 respecto a la inferencia del consentimiento de la víctima. En el artículo 19 la ley enuncia una serie de recomendaciones para la conducción de la investigación y apreciación de las pruebas en casos de violencia sexual, donde señala que la determinación de la ocurrencia del hecho no puede ser condicionada a la existencia de la prueba física, destacando la pertinencia de la práctica de pruebas periciales de orden psicológico en aras de entender el contexto de ocurrencia de los hechos; en el párrafo seis señala de manera explícita que “no se desestimaré el testimonio de la víctima de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, en especial cuando se trata de una víctima menor de edad”.

La ley insta a que se haga uso de técnicas de investigación de alta calidad para la obtención de pruebas sin ser degradantes para la víctima y minimizando toda intrusión en su intimidad; para eso se hace necesario que el forense cuente con reglamentos específicos que orienten la experticia. Este postulado hace parte de la hipótesis en la investigación que nos ocupa, y que

se desarrolla a lo largo de este documento.

1.2.1. Criterios jurisprudenciales.

Con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres afectadas por el desplazamiento forzado a causa del conflicto, la Corte Constitucional colombiana a través de su Auto 092 de 2008, en consonancia con lo manifestado en 2004 en la sentencia T-025, promueve una protección constitucional reforzada a las mujeres en esta condición.

En el Auto 092 la Corte constató la existencia de riesgos de género con ocasión del conflicto armado, y resaltó que la violencia sexual contra la mujer se configura como un patrón sistemático dentro de los hechos perpetrados por los actores del conflicto hacia la población civil. Señaló además que la respuesta estatal frente a este fenómeno era insuficiente tanto en el sector asistencial como en el sector justicia, donde los hechos eran prácticamente invisibilizados, contribuyendo a la impunidad de los mismos.

Sobre la manera como se venía adelantado la investigación judicial señaló que ocasionaba desconfianza en las víctimas, tanto por la ineffectividad en la investigación y juzgamiento como por el trato irrespetuoso del que eran objeto las víctimas durante las diligencias judiciales donde se sometían a cargas psicológicas importantes sin contar con acompañamiento de un equipo psicojurídico.

En sus consideraciones finales la Corte hace un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que ejerza sus deberes constitucionales y contribuya a la prevención e investigación de los hechos y la superación de la

impunidad.

En 2015 a través del Auto 009, la Corte nuevamente se pronuncia respecto a la sentencia T-025 de 2004 y a las órdenes proferidas en razón de esta en el Auto 092 de 2008. En el análisis del estado de las cosas, la Corte señala que la situación de violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado persiste en muchas de sus formas (violación, prostitución forzada y esclavitud sexual), señala nuevos riesgos de violencia sexual contra mujeres desplazadas y se pronuncia respecto a la precariedad del Estado en la prevención de la ocurrencia de nuevos hechos.

Respecto a las obligaciones encomendadas a la Fiscalía, la Corte expresa su preocupación frente a los obstáculos en el inicio de las investigaciones y la continuidad de los procesos judiciales, también manifiesta que algunas de las prácticas probatorias usadas por el ente investigador como, las pericias psiquiátricas para establecer el grado de veracidad del testimonio de la víctima, el análisis de historias clínicas para verificar la práctica de abortos y la toma de declaraciones sin propósitos claros pueden llegar a constituirse en acciones revictimizantes contraviniendo el derecho internacional.

La Corte resalta que la valoración de la evidencia probatoria debe adelantarse de acuerdo con estándares constitucionales, aplicando el principio de necesidad de la prueba sin vulnerar los derechos de las víctimas y sin someterla a exámenes innecesarios. Respecto al testimonio de las víctimas se resalta que estos no deben ser desestimados por presentar contradicciones que resultan insustanciales y que pueden obedecer a factores propios de la memoria o el estado psicológico de la víctima, en cuyo caso pueden ser explicados por un perito dentro de la práctica de su experticia.

Finalmente, la Corte insta a la Fiscalía General de la Nación a implementar medios de investigación dentro de los más altos estándares de calidad a la luz de la protección de los Derechos Humanos de las víctimas.

En consonancia con lo dispuesto en la Ley 1719 de 2014, la Corte Constitucional reiteró en su sentencia C-867 de 2014 que de acuerdo con las obligaciones del Estado y en atención a los estándares internacionales, evitar la revictimización de las personas sometidas a expresiones de violencia sexual es por excelencia un principio rector de la investigación judicial, luego, resalta que el operador de justicia debe en su actuar evitar a toda costa que la víctima deba dar reiteradamente su testimonio, someterse a exámenes innecesarios o enfrentar públicamente a su ofensor.

Por su parte, en la sentencia C-754 de 2015, la Corte se pronunció frente a la adopción del “Protocolo y el modelo de atención integral en salud para las víctimas de violencia sexual” por parte de las entidades que conforman el sistema de salud, con la finalidad de brindarle protección reforzada y prioritaria a las víctimas, transversalizando el enfoque psicosocial y promoviendo la colaboración interinstitucional entre el Sistema de salud y la Fiscalía General de la Nación para adelantar las respectivas investigaciones penales buscando con ello:

[...] el aseguramiento de los medios de prueba y su integridad para la garantía de la efectividad y eficacia de la investigación penal, que a su vez busca salvaguardar el derecho de las víctimas de violencia sexual al acceso a la justicia.

Respecto a la protección judicial reforzada con la que cuentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, la legislación ha dispuesto

una serie de medidas particulares tanto en la norma como en la jurisprudencia, que para el caso que nos ocupa pueden complementar el panorama normativo previamente expuesto.

Se trata de la Ley 1652 de 2013 relativa a la toma de la entrevista y el testimonio de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales dentro del proceso penal; si bien hace alusión a la denominada “entrevista forense” (que realiza el personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI), cabe precisar que dicha actuación no se equipara a la “evaluación psicológica forense” o peritaje psicológico, puesto que la primera se orienta a la indagación explícita de las circunstancias de modo tiempo y lugar de los hechos y la segunda hace referencia a la opinión técnico científica rendida por el profesional de la salud mental sobre la base de la información obtenida a través de la entrevista en cotejo con la información de contexto disponible para el momento de la evaluación la cual es aportada previamente por el Ente investigador.

No obstante lo anterior, es preciso resaltar que la precitada norma hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para adoptar la debida diligencia en la investigación, en dicho sentido conmina a la Institución a capacitar a su personal en técnicas de entrevista forense adecuadas a la etapa evolutiva de la víctima, a realizar sus actuaciones en un ambiente adecuado y a salvaguardar su testimonio a través de cualquier medio audiovisual.

Resulta pertinente destacar que una “entrevista forense” adecuadamente realizada le permite en momentos posteriores al perito obviar la indagación de información repetitiva, dirigiendo su entrevista hacia la documentación de los

factores de riesgo en los que se encontraba la víctima en el momento de ocurrencia de los hechos, así como las afectación sufridas con ocasión del delito en el plano personal, familiar, social y escolar.

Respecto al valor de la información obtenida por medio de la entrevista realizada a niños, niñas y adolescentes la Corte Constitucional en Sentencia T-117 de 2013 estableció que esta diligencia arroja

[...] datos significativos que demuestran las condiciones clínicas en las que quedó el menor-víctima por causa del delito consumado contra su humanidad, se evalúan sus miedos, temores, angustias, sueños, pesadillas, desafectos y trastornos a nivel sexual, entre múltiples situaciones, por lo cual requiere de una ambiente especial y favorable acorde con los principios del interés superior del menor.

Aludiendo a la Sentencia previamente citada, la Corte Constitucional en un nuevo pronunciamiento realizado en 2014 por medio de la Sentencia C-177 se refirió a la entrevista forense a los menores víctimas reiterando lo expuesto por la corporación en 2013 enfatizando en que toda actuación por parte del profesional que opere dentro de la investigación debe regirse por el reconocimiento de la vulnerabilidad del niño y la primacía de sus derechos constitucionales.

Finalmente resulta acertado citar la recientemente emanada Resolución 01774 de 2016, por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación adopta el Protocolo de investigación de violencia sexual y se establecen medidas para su implementación y evaluación.

Este protocolo tiene como propósito “impartir lineamientos y consolidar

buenas prácticas que faciliten la investigación y judicialización de los delitos de violencia sexual” (p. 2); haciendo en sus partes pertinentes alusión a la prueba pericial psicológica, señalando su propósito, utilidad, y estableciendo la diferencia entre la denominada “entrevista forense” y la “evaluación psicológica forense”, a la que previamente se hizo referencia en este texto.

A partir de la información reseñada en los apartados anteriores resulta acertado señalar que el Estado colombiano cuenta con un marco normativo y jurisprudencial acorde a los estándares internacionales donde incorpora medidas específicas para la salvaguarda de los Derechos Humanos de las mujeres y en particular de las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado y que deben ser tomadas en cuenta en todas las actuaciones de los encargados de la administración de justicia incluyendo a quienes obran en calidad de peritos, pues el marco normativo aporta las herramientas necesarias para avanzar en la superación de la impunidad en estos casos.

El segundo tópico a desarrollar dentro de este capítulo se relaciona con los estándares de producción y apreciación del testimonio como fundamento de prueba pericial psicológica en relación a la violencia sexual contra la mujer en contextos de violencia sociopolítica.

Esto se aborda sobre la base de cinco sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con violencia sexual contra las mujeres en estos contextos: caso del penal Miguel Castro Castro vs. Perú (2008); Fernández Ortega y otros vs. México (2010); Rosendo Cantú y otra vs. México (2010); Veliz Franco y otros vs. Guatemala (2014) y Espinoza Gonzáles vs. Perú (2014).

1.3 Estándares de apreciación y toma del testimonio como base de la prueba pericial en relación a la violencia sexual contra la mujer en el Sistema Interamericano.

El peritaje ha tenido un papel importante en las providencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto para tomar decisiones sobre los casos contenciosos, como para generar jurisprudencia y valorar aspectos no específicamente jurídicos (Beristain, 2008, p.72).

Respecto a la violencia sexual contra la mujer, la Corte ha desarrollado providencias que han configurado estándares en cuanto a la toma y apreciación del testimonio, los cuales se sugieren como lineamientos mínimos a seguir por los profesionales que fungen como peritos en el área de la psicología forense.

Respecto a las afectaciones sufridas por las víctimas, la Corte ha reconocido que las mujeres víctimas de violación sexual padecen graves daños psicológicos y sociales permanentes en el tiempo que causan sufrimientos severos y que existen aún cuando la persona no evidencie lesiones de orden físico o enfermedades.

La corte ha señalado que la violación sexual es una experiencia altamente traumática distinta a otras formas de violencia y supone que la víctima padece un sufrimiento psicológico severo inherente al proceso de victimización y que es difícilmente superable con el paso del tiempo, es decir, los daños psicológicos se presumen existentes en las víctimas y asociados a los hechos de manera directa (Espinoza Gonzáles, 2014, párr. 193. Penal Miguel Castro, 2008, párr. 311 y Rosendo Cantú, 2010, párr. 114). Los daños sufridos por las

víctimas son visibilizados ante los tribunales a través del testimonio de las personas afectadas y más específicamente a través de la prueba técnica en el área de la psicología forense.

Por otro lado, la Corte ha señalado que “la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima” (Espinoza Gonzáles, 2014, párr. 226. Fernández Ortega, 2010, párr. 119. Rosendo Cantú, 2010, párr. 109), siendo también considerados como víctimas los familiares de quien sufre de manera directa la violación a sus Derechos Humanos, pues padecen sufrimientos tanto por las acciones de las que han sido objeto sus seres queridos, como por las posteriores acciones u omisiones por parte del Estado en la debida diligencia de la investigación de los hechos y sanción de los responsables (Rosendo Cantú, 2010, párr. 137, Veliz Franco, 2014, párr. 233 y Fernández Ortega, 2010, párr. 143), es por ello que los familiares de las víctimas también pueden ser objeto de evaluación psicológica forense en aras de visibilizar sus afectaciones.

Respecto al testimonio de la víctima en los casos de violencia sexual, la Corte ha manifestado que por tratarse de hechos que se cometen en ausencia de personas distintas a la víctima y al agresor, las declaraciones de la víctima deben ser consideradas pruebas fundamentales dentro de la investigación (Rosendo Cantú, 2010, párr. 89); su declaración cobra relevancia también debido a que en los casos de violación sexual no siempre existe evidencia física que pueda ser objetivada a través de un examen médico, luego, esto no puede ser indicativo de la no ocurrencia de los hechos, o falta de veracidad de los dichos de la víctima (Espinoza Gonzáles, 2014, párr. 153. Fernández

Ortega, 2010, párr. 124).

La Corte ha señalado que las declaraciones de las víctimas deben ser tomadas bajo condiciones favorables para la persona, que observen su dignidad humana y las características particulares del caso haciendo uso del enfoque diferencial (Fernández Ortega, 2010, 105. Rosendo Cantú, 2010, párr. 95).

Al hacer referencia a la debida diligencia como obligación a adoptar por parte del Estado, la Corte ha señalado la necesidad de que el ente investigador adopte medidas especiales a favor de las víctimas; estas medidas se ven reflejadas en aspectos claves para el proceso judicial como lo es la toma del testimonio, donde la Corte señala que debe ser tomado por personal capacitado, “ y que las salas de entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil insensible o inadecuado” para las víctimas, procurando no realizar interrogatorios innecesarios y reiterativos en aras de “evitar, en la medida de lo posible, la revictimización” (Rosendo Cantú, 2010, párr. 201).

Respecto a la toma del testimonio también ha señalado que el Estado, a través de sus agentes, debe propender por recibir la declaración mostrando sensibilidad frente a la condición de la víctima, ubicando los hechos en contexto, recolectando y protegiendo adecuadamente sus relatos, pues ellos se constituyen en un medio de conocimiento de alto valor probatorio durante el proceso judicial. La preservación adecuada del testimonio evita que la persona deba acudir de manera reiterada a rendir indagatorias respecto a los hechos.

Durante la toma de la declaración la Corte ha manifestado que es ideal que sea tomada bajo condiciones de seguridad en un ambiente cómodo que favorezca la participación de la víctima desde el reconocimiento de su dignidad

y teniendo en cuenta sus características particulares (Rosendo Cantú, 2010, párr. 170).

Como estándar para la valoración de las declaraciones de las víctimas vertidas a lo largo del proceso, la Corte ha considerado que no es necesario que cada vez que la persona acude al sistema de justicia manifieste de manera literal y sin omisiones, todos los hechos de los que fue objeto; resalta que es normal y esperado que en el recuento espontáneo de los mismos existan imprecisiones u olvidos, justamente porque los hechos ocurren en un momento altamente traumático para quien los sufre; ello no puede considerarse indicativo de mendacidad de la víctima en su declaración (Espinoza Gonzáles, 2014, párr. 149-150. Rosendo Cantú, 2010, párr. 91 y 323).

Lo anterior puede ser explicado a través del peritaje psicológico, ilustrando a el operador de justicia acerca de la manera cómo la persona víctima ha incorporado la experiencia traumática dentro de su psiquismo y cómo la vivencia del hecho es recuperada por medio del relato, el cual está mediado por la subjetividad de la persona y las características propias de la memoria traumática; esto será abordado en detalle en el tercer capítulo de este texto.

A manera de conclusión es pertinente señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus providencias ha aportado elementos específicos sobre el alcance del deber de actuar con la debida diligencia en la toma de testimonios, y que, si bien el objetivo principal de la prueba pericial en psicología no es tomar aisladamente el testimonio, si no hacer un análisis del contenido de la información, el perito debe obrar conforme a los estándares propuestos por la corporación en aras de la protección de los derechos de las víctimas.

La investigación, juzgamiento y sanción de los responsables es una tarea primordial en la superación de la impunidad, para ello, el ente judicial se ha valido de distintos medios de conocimiento que le han permitido o idealmente le permitirían cumplir con su función; el peritaje es uno de ellos.

En razón de lo anterior, el siguiente capítulo hace referencia al peritaje psicológico como medio de prueba e instrumento para garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y enfatiza el carácter psicosocial del mismo, pues factores de esta naturaleza son los que han sido tenido en cuenta en la jurisprudencia internacional pertinente para la apreciación del daño en la persona víctima y la valoración del testimonio, elemento fundamental en el desarrollo de una experticia de esta naturaleza.

Capítulo ii

2. La prueba pericial en psicología

El peritaje psicológico es “una actividad de orden técnico que consiste en evaluar a un individuo o grupo de individuos con el fin de relacionar aspectos de su funcionamiento psicológico con cuestiones jurídicas” (Muñoz, Manzanero, Alcázar, Gonzáles, Pérez y otros, 2011).

El presente capítulo habla inicialmente de la naturaleza jurídica del peritaje y desarrolla los aspectos generales de la prueba pericial psicológica centrándose en su objetivo y estructura. Más adelante se hace la distinción entre dos tipos de peritaje según su enfoque de evaluación: el psicológico y psicosocial; finalmente se señala la importancia de la prueba pericial en procesos de litigio en casos relacionados con violencia sexual en el marco del conflicto armado, especialmente cuando se dirige hacia las mujeres.

2.1 Naturaleza jurídica

En Colombia, la prueba pericial de tipo penal es regulada por el Código de procedimiento penal (Ley 906 de 2004). En sus partes pertinentes, la norma hace referencia a su apreciación, procedencia, cualificación técnica y límites a la función del perito y su informe o dictamen. Específicamente, respecto a la naturaleza jurídica señala en su artículo 405, que: “la prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados”.

Pacheco, Baltodano, Sasa, Long, y Rodríguez (2009), al precisar el papel del peritaje psicológico en el litigio de violaciones a Derechos Humanos, han señalado que dentro del proceso judicial es una herramienta esencial, puesto que tanto las partes como el, o la, juez son técnicos expertos en el derecho, luego, requieren contar con

[...] la voz de la experticia de otra disciplina, que puede aportar desde su experiencia a la constatación de los hechos, la valoración de los daños y los efectos que determinada situación está produciendo en una víctima (p.22).

Específicamente, cuando se trata de violencia sexual, autores como Caicedo, Buenahora y Benjumea; han señalado que “las pruebas periciales se constituyen en un elemento probatorio muy fuerte” (2009, p. 160). El enfoque interdisciplinario necesario en este tipo de litigios es promovido por el peritaje psicológico, puesto que le proporciona a las partes del proceso una visión integral en la comprensión del fenómeno de la victimización, entendiendo sus causas, su dinámica, sus consecuencias, y los posibles mecanismos de reparación para las víctimas.

La violencia sexual dirigida a mujeres en el marco del conflicto armado es un fenómeno de victimización complejo debido al contexto sociopolítico en el que ocurre; entender y explicar las consecuencias de estos hechos es una tarea de la cual se ha ocupado la psicología forense, esta área:

[...] desarrolla sus conocimientos y aplicaciones con vistas a concluir sus hallazgos en el seno de una sala de justicia con la finalidad de auxiliar al juzgador en la toma de decisiones (Soria, 2006, citado por Muñoz, et al., 2011).

2.2 Objetivos la evaluación psicológica forense y estructura del informe pericial

En lineamientos de orden nacional e internacional aplicables a la evaluación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, como el Protocolo de Estambul, emanado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos en 2001, y el Protocolo de evaluación básica en psicología y psiquiatría forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses vigente desde el año 2009; se ha establecido que las experticias forenses pueden orientarse a determinar las cuestiones que se exponen a continuación:

Valorar el estado mental de la víctima antes, durante y después de los hechos; determinar los impactos psicológicos producidos por los hechos; recomendar medidas específicas para la reparación de acuerdo a las necesidades identificadas (Barrera, Crespo, Tamayo, De la Hoz, Méndez y otros, 2009. p.13); evaluar las condiciones de integración social y comunitaria de la víctima, determinar los impactos de la victimización en el ámbito familiar de la víctima y las resignificaciones a su proyecto de vida (Sarmiento et al, 2013. p. 29); correlacionar el grado de concordancia entre los hallazgos psicológicos y la descripción de los hechos; determinar si los signos psicológicos son reacciones esperables o típicas al estrés extremo dentro del contexto cultural y social de la víctima; señalar el marco temporal en relación con los acontecimientos y en qué punto de la recuperación se encuentra la persona; y finalmente identificar factores estresantes coexistentes a los hechos y su impacto en la persona afectada (Organización de Naciones Unidas, 2001, p.77).

De lo anteriormente expuesto se puede colegir que el peritaje psicológico contribuye a: demostrar la existencia de los hechos; determinar el tipo de daño que produjeron en las víctimas y sus familias, y orientar a la autoridad respecto a las reparaciones pertinentes para cada caso.

La respuesta a los interrogantes que surgen dentro de los objetivos de este tipo de pericias es proporcionada por la persona especialista en el área de la psicología forense a través de su informe pericial. La experticia rendida debe ser el resultado de la aplicación de un proceso cuidadoso con base en los postulados teóricos de la ciencia y los lineamientos técnicos aceptados por la comunidad científica, entre ellos se destacan los precitados protocolos, respecto a los cuales se enfatiza en el cuarto capítulo de este texto.

Según lo expuesto por Urra y Vásquez (1994) citado por Tapias (2004), el informe pericial “debe contar esencialmente con: encabezamiento, objetivos, metodología o procedimiento de evaluación, resultados y conclusión” (9.51).

Los resultados y conclusiones derivadas del análisis de la información obtenida por el perito y plasmadas en su informe pueden ser realizadas desde dos enfoques de evaluación: el psicológico y el psicosocial, los cuales se explicarán a continuación.

2.3 Tipos de peritaje según sus enfoques de evaluación

Los efectos potenciales de las violaciones graves a Derechos Humanos, como la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, incluyen experiencias traumáticas acumulativas que causan impactos a nivel individual, social, familiar y comunitario (Kira, 2002).

La exposición a un hecho delictivo es una experiencia traumática; en la mayoría de los casos es vivenciada por la persona con una fuerte emocionalidad negativa susceptible de desestabilizar su estado psicológico causando graves consecuencias para su salud mental (Echeburrua, 2005, p.58). El concepto de salud mental será desarrollado ampliamente en el capítulo siguiente.

Desde el enfoque de evaluación, y para los fines de la presente investigación, la autora distingue entre dos tipos de peritaje: el psicológico y el psicosocial.

2.3.1 El peritaje psicológico

En este tipo de evaluación prevalece el modelo dicotómico de salud-enfermedad (modelo médico), donde se utilizan categorías de diagnóstico estandarizadas y se realizan recomendaciones terapéuticas de orden psicológico o psiquiátrico.

En este tipo de experticia, el psicólogo forense concentra sus esfuerzos en determinar la existencia de secuelas o daños psíquicos, por medio de la búsqueda de signos y síntomas que sugieran presencia de una enfermedad mental o disfunción de acuerdo a los manuales diagnósticos vigentes para el área de salud mental (DSM V, manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría y CIE 10, clasificación internacional de las enfermedades de Organización Mundial de la Salud).

2.3.2. *El peritaje psicosocial*

Gómez (2009), se refiere al carácter psicosocial de la evaluación forense, definiendo el enfoque psicosocial como: “el entramado de relaciones e influencias que existen entre lo individual, familiar, grupal y social” (p. 8).

Esta reflexión se deriva del entendimiento del ser humano como un ser construido sobre la base de su individualidad, la cual es influenciada por su entorno; señala la autora que:

[...] esta concepción del ser humano será la referencia en el momento de evaluar el impacto y el daño que puede derivarse como consecuencia de ser víctima de graves violaciones a derechos humanos (p. 8).

Desde la perspectiva psicosocial, la pericia psicológica se orienta hacia la visibilización de todas las afectaciones sufridas por la persona víctima en sus áreas de relación (laboral, social, familiar, comunitaria) a lo largo del tiempo, desde la ocurrencia del hecho hasta el momento en que cursa el proceso judicial, teniendo en cuenta su rol dentro de la familia y comunidad, sus intereses sociales y políticos, sus expectativas de reparación, su proyecto de vida y su condición educativa y cultural.

Abordar una práctica pericial desde la perspectiva psicosocial reviste de un grado mayor de complejidad que abordarla desde el enfoque psicológico. Este tema será desarrollado ampliamente en el siguiente capítulo, por lo pronto, nos ocuparemos de resaltar la utilidad de la prueba pericial en la investigación de la violencia sexual en situaciones de violencia sociopolítica.

2.4 La prueba pericial en la investigación de la violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado

En Colombia, pese a los avances en materia legislativa para judicializar hechos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, persiste una barrera importante que no ha permitido superar la impunidad, y que, según lo expuesto por la Mesa de seguimiento al Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional, se encuentra relacionado con la falta de estrategias investigativas por parte del operador de justicia. En el quinto informe de seguimiento realizado por la Mesa, se señala que:

[...] la escasa actividad investigativa se manifiesta en la persistencia de la búsqueda de la prueba física y testimonial de la víctima, sin desplegar otra actividad probatoria para dilucidar los hechos victimizantes (Mesa de seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional, 2013. p.43).

En este orden de ideas el uso del peritaje psicológico se propone en esta investigación como una alternativa ante este hallazgo crítico, puesto que el testimonio experto puede ser determinante a la hora de documentar el contexto de violencia sociopolítica en el cual ocurre la victimización y sus consecuencias; por otro lado, el uso de las técnicas de la psicología forense (diseñados para favorecer un clima de confianza y contención emocional a la víctima al tiempo que se indaga respecto a los hechos y sus consecuencias) contribuye a la prevención de la revictimización dentro de la investigación judicial, a su vez puede también favorecer la recuperación emocional de la

víctima, quien, en la búsqueda de la justicia puede encontrarle un sentido a la rememoración de los hechos.

La entrevista forense, si bien no tiene fines terapéuticos, cuando es llevada a cabo adecuadamente puede convertirse en un espacio donde la víctima pueda expresar y clarificar sus sentimientos. Hablar de su historia de vida posterior a los hechos, hace posible que la víctima se identifique como una sobreviviente, pues tiene la posibilidad de hablar no solo de las consecuencias negativas de los hechos, si no también de los “recursos personales que le han permitido protegerse y sobreponerse a los hechos de la violencia a lo largo del tiempo” (Llanos y Sinclair, 2011. p.55).

La evaluación psicológica forense cobra un papel fundamental dentro de la investigación de violencia sexual en el conflicto armado, pues estos hechos tienen como fin principal “destruir la integridad y el funcionamiento psicológico y social de la víctima” (Turkan, Schakar y Kaplin, 2009. p.5) e impactar su entorno comunitario con ello; los efectos físicos de los hechos no siempre son visibles, y de serlo no siempre son los que mayor impacto causan en la víctima. Turkan et al. 2009, han señalado que “sus consecuencias psicológicas a menudo son más persistentes y perturbadoras que la incapacidad física” (p. 6).

Beristain ha resaltado el valor que ha cobrado el peritaje psicológico en las sentencias por violaciones a Derechos Humanos proferidas por la Corte Interamericana, ha señalado que la prueba pericial “ha servido para mostrar impactos que después han adquirido relevancia jurídica en la construcción de tipologías de delitos”, de igual manera ha señalado que la prueba pericial ha servido “no solo para tomar mejores decisiones sobre los casos, sino también

para generar jurisprudencia y valorar aspectos que a veces no son específicamente jurídicos, como el daño psicológico o cultural, pero que inciden en la experiencia de las víctimas” (2009, p. 72).

Es importante precisar que el peritaje con enfoque psicosocial es diferente a la atención psicosocial; el peritaje es un medio de prueba con fines judiciales, y la atención hace referencia a una serie de procesos llevados a cabo por distintos profesionales cuya tarea es la “implementación de servicios que buscan prevenir y mitigar los efectos emocionales, físicos, culturales, espirituales, sociales y económicos generados por la violación de derechos humanos” (Moreno y López, 2009 p. 9).

A manera de conclusión, es importante señalar que la pericia psicológica puede llegar a configurarse como una herramienta indispensable para la comprensión de la complejidad del fenómeno de victimización en casos relacionados con violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

Su uso como medio de conocimiento, siempre y cuando se encuentre acorde con los avances en materia de Derechos Humanos, contribuye al avance de la investigación judicial, el encargado de la investigación puede encontrar en el peritaje psicológico la manera de vincular elementos psicosociales con elementos jurídicos, dándole solidez al proceso y avanzando en la lucha contra la impunidad.

La psicología clínica y social han avanzado de manera importante en la documentación académica de los efectos sufridos por las mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado, estos hallazgos se constituyen en un insumo valioso para la psicología forense dado que dan

luces al profesional a la hora de valorar y documentar una afectación en una víctima y exponer sus hallazgos ante un tribunal.

En el sentido de lo previamente expuesto, el siguiente capítulo aborda los impactos psicosociales y psicológicos más frecuentes en las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, los cuales serán considerados más adelante dentro del análisis crítico de los reglamentos técnicos para la práctica de pruebas periciales en estos casos, y finalmente para el desarrollo de recomendaciones metodológicas para la evaluación forense desde el enfoque psicosocial.

Capítulo III

3. Impacto psicológico y psicosocial en mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado

El presente capítulo inicialmente desarrolla la perspectiva psicosocial del concepto de salud mental, dando luces respecto a una mirada integradora que va más allá del modelo clásico salud-enfermedad, con el fin de clarificar la importancia y el alcance de dicha noción en el desarrollo de la función pericial y sirviendo como insumo para el análisis crítico de los reglamentos técnicos vigentes para evaluación psicológica forense de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Más adelante se presentan algunos términos técnicos de relevancia forense en los cuales se categorizan académicamente las posibles afectaciones sufridas por una persona expuesta a un fenómeno de victimización. Estos términos son: daño, secuela y trauma. Estas categorías son analizadas a la luz de la pertinencia de su uso en el tipo de peritación que ocupa la presente investigación.

Finalmente, luego de la descripción conceptual de los anteriores temas, se presenta una serie de tipologías de impactos psicológicos y psicosociales frecuentes que han sido identificados específicamente en mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Conocer estas tipologías y hacer un análisis de ellas permite establecer criterios específicos de tipo orientativo de cara a lo que el galeno puede encontrar en la persona víctima durante su evaluación, por ende, se esperaría que dicha información fuese incluida dentro de un reglamento técnico usado

para la peritación en este tipo de casos.

3.1 La perspectiva psicosocial de la salud mental

La Corte Constitucional colombiana, en sentencia C-754 de 2015, ha señalado que:

La salud se constituye en un derecho fundamental y autónomo, esencial para la garantía de la dignidad humana, que comprende el derecho al nivel más alto de salud física mental y social posible (págs. 34-35).

El postulado de la Corte es consistente con la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud (2006), que ha definido la salud como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Esta definición arroja luces importantes al ámbito forense, pues indica que la evaluación pericial psicológica no solo debe centrarse en el diagnóstico y la documentación de indicadores sugerentes de la presencia de enfermedad mental (peritaje psicológico), sino que debe ampliarse hacia la detección de aspectos de orden psicosocial y ambiental que interfieran con el goce del estado de bienestar de la persona examinada (peritaje psicosocial).

Cabe mencionar que aspectos relacionados con la enfermedad física interfieren también con el goce de dicho estado, no obstante, es el área de medicina forense quien se encarga de hacer este tipo de estudios, los cuales se toman como referente e insumo para la evaluación psicológica forense.

En un sentido más específico que el propuesto por la Organización Mundial de la Salud, Gómez, (2009, permite acercarse al entendimiento del concepto de “estado de completo bienestar”, planteando que la salud mental puede ser

entendida como:

[...] el estado físico, mental, conductual y social que genera en la persona una sensación de seguridad, previsibilidad de lo que ocurrirá en su futuro, control sobre las propias acciones, respeto, dignidad y capacidad de adaptarse a las adversidades (p.12).

Focalizarse en cada uno de los aspectos contenidos en esta última definición como indicadores de salud mental, cobra una relevancia significativa en la producción de una prueba pericial con un enfoque psicosocial, pues tener en cuenta aspectos como la previsibilidad, la seguridad, la dignidad y la capacidad adaptativa de una víctima como puntos centrales de análisis en un examen pericial le permite al profesional ampliar el panorama de evaluación, posibilitándole ir más allá del modelo tradicional centrado en la detección de enfermedades mentales o patologías (modelo médico).

Dado que el objetivo principal de la peritación psicológica con enfoque psicosocial es describir el funcionamiento mental de la persona examinada en relación con los hechos judicialmente relevantes, es trascendental ocuparnos de darle importancia al análisis del contexto en el cual ocurren estos sucesos.

Entender las consecuencias del fenómeno de victimización en función del contexto nos acerca a la mirada del enfoque psicosocial en la labor forense, como lo veremos a continuación.

3.1.1 La salud mental en función del contexto

Continuando con el acápite anterior, la documentación forense de las consecuencias en la salud mental, derivadas de la exposición a violaciones

graves a Derechos Humanos demanda que el/la perito tenga una mirada desde la perspectiva psicosocial. Esto implica que su evaluación parta del contexto de los hechos acaecidos, pues la víctima se personifica como un sujeto influenciado por su entorno, y no como un organismo meramente biológico, aislado de su medio socio-cultural y político.

Cuando hablamos de contexto se hace referencia a las condiciones que posibilitaron la existencia de los hechos, las afectaciones que generaron y los factores que las mantienen, agudizan o favorecen su recuperación.

El enfoque psicosocial permite no solo conocer las consecuencias de los hechos, sino comprender las causas de los hechos desde el contexto social, cultural y político, pues es ahí donde el individuo se constituye como un sujeto social dotado de identidad. En este sentido, la Corte Constitucional colombiana en su providencia T-045 de 2010 ha señalado que:

[...]la mirada psicosocial desde la categoría identidad integra aspectos diferenciales como género, generación o ciclo vital, tipo de hecho violento, respuesta institucional y social, tipo de pérdidas sufridas y condiciones sociales y políticas de la persona víctima y tiempo, pues estos se constituyen en el contexto para reconocer la particularidad de cada persona o grupo (p. 17).

Esta premisa de la Corte se encuentra en consonancia con la propuesta de autores como Martín Baró, (1992), citado por Gómez (2009) y el Centro de atención psicosocial de Perú (2009). El primero entiende la salud mental como un hito dinámico que se construye en realidades socio-históricas concretas; el segundo, señala que la salud mental solo es posible de ser entendida en las relaciones sociales y el medio político donde se desenvuelve el individuo, es

decir, en función del contexto e influenciado por él (p.7).

Respecto al contexto del conflicto armado en el cual se suscita la violencia contra la mujer, la Corte Constitucional en sus autos 092 de 2008 y 009 de 2015 ha señalado que las mujeres están sujetas a un riesgo desproporcionado de violencia y abuso sexual, luego, es necesario que en la práctica pericial se analicen las consecuencias de estos hechos a partir de un enfoque de género que permita comprender las condiciones de vulnerabilidad en las cuales fue posible la victimización y las condiciones que han contribuido a que las afectaciones se perpetúen a lo largo del tiempo. Para ello se hace necesaria una interpretación en este sentido, para visibilizar el impacto diferencial de la violencia sociopolítica, pues ha sido claro que, en este contexto, las mujeres han sufrido impactos psicológicos de naturaleza extrema, que los hombres no han padecido de manera comparable (Corte Constitucional, C-754, 2015).

La importancia del contexto en la interpretación y análisis de los fenómenos de victimización dirigidos hacia la mujer con ocasión del conflicto armado, ha sido destacada por la Corte Constitucional en la sentencia T-045 de 2010; en dicha providencia ha señalado que cifrar el análisis en función del contexto permite particularizar cada caso, integrando “aspectos diferenciales como género, generación o ciclo vital, tipo de hecho violento, respuesta institucional y social, tipo de pérdidas sufridas, condiciones sociales y políticas de la persona” (p.51); esto, para entender la experiencia emocional, a partir de sus referentes sociales, culturales y políticos, e “identificar sus daños, transformaciones y pérdidas ocasionadas por los hechos violentos de los que fueron víctimas en el contexto de la violencia sociopolítica que vive Colombia” (p.51).

El entendimiento de la experiencia de la víctima posibilita la toma de

medidas de reparación pertinentes en su favor, como por ejemplo la rehabilitación por medio de la remisión a programas de salud mental integrales que aborden un enfoque psicosocial.

Lo anteriormente expuesto, cobra relevancia al hablar del deber ser de la evaluación forense de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, puesto que es importante que el/la perito tenga en cuenta que hablar de contexto significa entender que:

[...] las violaciones graves a Derechos Humanos se enmarcan en fenómenos de macro criminalidad y violencia sociopolítica, por ende, las consecuencias causadas en las víctimas difieren de las producidas en otros ámbitos violentos (Guerrero, A. y Lozano, N. 2011, p.8).

Luego, deben ser analizadas desde ópticas diferenciales, como el enfoque de género, el enfoque de derechos y el enfoque psicosocial.

Entender la importancia del contexto en el momento de adelantar la labor forense le permite al galeno documentar adecuadamente cada caso, pues el ambiente sociopolítico en el que ocurren los hechos deriva en que la víctima experimente una amenaza vital donde su integridad física y mental sufre graves consecuencias. Este ambiente sociopolítico es conocido en el ámbito forense específicamente como “situación límite”, y es definido como: “un escenario de extremo riesgo vital para todos, del cual el individuo percibe que no puede escapar” (Castaño, s.f. p. 2).

En vista de que la violencia sexual en el marco del conflicto armado no se trata de un evento aislado, sino de un conjunto de hechos vulnerantes ocurridos bajo un contexto sociopolítico, se esperaría que un reglamento técnico para evaluar las consecuencias psicológicas y psicosociales en las

víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado contase con lineamientos específicos para la documentación y el análisis del contexto en que ocurrieron los hechos, haciendo evidente el porqué se constituyeron en una situación límite capaz de desencadenar afectaciones en la salud mental de las víctimas distintas a las que pudiesen haber sido producidas por delitos comunes.

Las consecuencias más comúnmente reportadas en las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado se exponen de manera específica más adelante, previa exposición de las categorías forenses en las cuales es posible agrupar dichas afectaciones en el desarrollo de la prueba técnica (daño psicológico y daño psicosocial).

3.2 El concepto de daño en la práctica psicológica forense

Al igual que otras áreas especializadas, la psicología forense se ha ocupado de desarrollar un lenguaje técnico, que ha permitido a los profesionales en ejercicio unificar criterios de análisis e interpretación para documentar los hallazgos de relevancia pericial en una evaluación.

Los orígenes y las consecuencias de la victimización han sido estudiadas principalmente en dos dimensiones: psicológica, o intrapsíquica (que se origina dentro de la mente) y psicosocial (que se origina en las relaciones sociales). Esto será explicado a continuación.

3.2.1 Daño psicológico

El daño psicológico (daño psíquico) es definido como: “la consecuencia de un acontecimiento que afecta la estructura vital y generalmente acarrea trastornos y efectos patógenos en la organización psíquica” (Tkazuc, 2001. p.25), es decir, el daño psicológico es equiparado al concepto de enfermedad mental, dado que se considera presente cuando la persona víctima ostenta un funcionamiento estimado como anormal dentro de su grupo social de referencia.

Desde el modelo clásico (modelo médico) el origen de la enfermedad mental se encuentra en el individuo, pues su desencadenante no es el hecho traumático en sí mismo, si no los deficientes recursos psíquicos con los que cuenta la persona, los cuales no le permiten afrontar la situación vivida de manera adaptativa y por ello desarrolla estados psico-patológicos.

Cuando el/la perito enfoca su evaluación únicamente en búsqueda de la patología puede resultar inadecuado en la peritación de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, por dos principales razones: la primera, porque cifra el origen del daño en los recursos psíquicos de la víctima, pudiendo llegar a responsabilizarla por su estado mental e inadvirtiendo el contexto en el cual se suscitan los hechos. La segunda, porque es esperado que en circunstancias de trauma extremo, como las violaciones graves a Derechos Humanos, la víctima responda de una manera que en situaciones distintas puede ser considerada como patológica.

De lo anteriormente expuesto, es para la autora pertinente advertir que los cambios de conducta y los estados emocionales de las víctimas son

respuestas normales ante hechos anormales.

El concepto de daño psíquico o psicológico puede ser equiparado al concepto de secuela, definida como una:

[...] discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Se trata, por tanto de una alteración irreversible en el funcionamiento psicológico habitual (Echeburrua y Corral, 2005. p. 62 & Rondón, L. 2013).

Este concepto resulta riesgoso en la práctica del tipo de pericias que ocupan a la presente investigación, puesto que el criterio de irreversibilidad puede llegar a generar la sensación de que las afectaciones sufridas por las víctimas son de carácter irreparable y que ellas se encuentran deterioradas o dañadas a raíz de los hechos, invisibilizando que son sobrevivientes que pese a su sufrimiento han logrado continuar con su vida, afrontando los hechos, avanzando en su recuperación emocional, sobreponiéndose a su historia y demandándole a la justicia la reparación.

Es importante tener en cuenta estas observaciones respecto al concepto de daño, para efectos del análisis de los reglamentos técnicos vigentes para evaluar víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

3.2.2 Daño psicosocial

Antes de clarificar la definición de daño psicosocial, resulta pertinente remitirse al origen de este tipo de daño, es decir al concepto de “trauma psicosocial” desarrollado por Martin-Baró (1988), quien en su tesis plantea que el trauma hace referencia a una situación desfavorable para la persona, cuya

causa no se encuentra en sus particularidades como individuo sino en su contexto social y que se alimenta y mantiene en la relación individuo – sociedad (p.78).

El daño psicosocial entonces, es la consecuencia del trauma psicosocial y es entendido como:

[...] el resultado de procesos que niegan la dignidad humana y que afectan negativamente las relaciones satisfactorias al punto de generar situaciones de carencia o agudizar los estados carenciales previos, ocurre en el contexto de una relación del ser humano con otros o con su contexto” (Bello y Chaparro, 2009. p.50 citado por Rebolledo y Rondón, 2010. p.42)

Esta forma de daño comprende:

[...] aflicciones y sufrimientos causados a las víctimas directas y sus seres queridos, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o de su familia (Amendolarro, Conte, Del Do, Gutman, Lenhardtson y otros, 2007. p. 301).

Tanto el concepto de trauma, como el concepto de daño psicosocial, resultan importantes en la práctica de la prueba pericial en la medida que demandan una perspectiva de interpretación histórica y social de las consecuencias de los hechos victimizantes en el contexto sociopolítico, evitando la patologización de las afectaciones sufridas por las víctimas, pues se consideran respuestas normales ante condiciones anormales y no al contrario, como se expuso anteriormente.

Sería adecuado encontrar en los reglamentos técnicos de abordaje forense,

una orientación respecto a estas nociones, de modo tal que el perito plantee su evaluación en función del contexto, logrando interpretar las vivencias de las víctimas como experiencias emocionales generadoras de sufrimiento y cambios en la interacción con su entorno, las cuales toman formas diferenciadas según la historia personal de cada una.

A diferencia del daño psicológico, el daño psicosocial valora a la víctima como un sujeto social en función de su entorno y no como un organismo aislado.

Es importante resaltar que no todos los impactos negativos de la victimización se relacionan con la presencia de enfermedad mental ya que:

[...] dichos impactos deben ser vistos desde la relación dialéctica entre el individuo y la sociedad, los impactos son psicosociales porque obedecen a razones políticas, y se dan en el marco de dinámicas y relaciones sociales (Monje, Trujillo, Luna y Restrepo, 2010. p. 323).

La Corte Constitucional ha señalado que es pertinente analizar cada caso en particular, ya que de este modo se favorece:

[...] obtener una mirada compleja sobre los efectos psicosociales que observamos en las familias y personas, teniendo en cuenta el contexto y el tipo de hecho violento del cual han sido víctima (Corte Constitucional, T-045, 2010. p.50).

El modelo psicosocial a la hora de evaluar el daño resulta entonces más amplio y complejo que el modelo médico, dado que la enfermedad mental no es la única consecuencia posible de la victimización, pues existen otras consecuencias negativas sufridas por las víctimas que no se ubican en el

contexto de la patología, tal y como lo señalaremos en el siguiente apartado.

3.3. Efectos de la violencia sexual en el conflicto armado

Para Morales (2012), los efectos de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto hacen referencia a “los cambios que sufrieron con posterioridad a los hechos y que resultan significativos en su posibilidad de gozar del bienestar emocional” (p.2).

Como se señaló en el primer capítulo de esta investigación, la violencia sexual contra la mujer es un hecho abiertamente discriminatorio que se inscribe en una sociedad patriarcal que la legitima e invisibiliza. Esta forma de violencia se ve exacerbada en situaciones de conflicto armado configurando una grave violación a los Derechos Humanos, “de allí que los impactos y daños psicosociales en niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, partiendo de una situación de vulnerabilidad preexistente, resulten diferenciales, desproporcionados y agudizados” (AVRE, 2011. p.1).

Los efectos específicos de la violencia sexual contra las mujeres con ocasión del conflicto armado han sido estudiados por profesionales de la psicología quienes en su práctica clínica y asistencial han encontrado aspectos reiterados en los casos atendidos.

Conocer los efectos psicológicos y psicosociales de la violencia sexual en el marco del conflicto armado proporciona al perito un marco de referencia respecto a lo que puede llegar a ocurrir con las víctimas en las diferentes facetas de su vida y por ello es importante que se encuentren desarrolladas en el marco teórico de un reglamento técnico para la evaluación de la violencia

sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, pues son hallazgos comunes y ampliamente documentados en la población objetivo.

Esto será expuesto a continuación y es tenido en cuenta en el análisis de los reglamentos técnicos vigentes para la evaluación de la violencia sexual dirigida hacia las mujeres con ocasión del conflicto armado en el siguiente capítulo.

3.3.1 Efectos psicológicos

Los actos de violencia sexual son experiencias en extremo negativas vividas de manera traumática que atentan contra la dignidad, la salud física y mental de las víctimas, dado que:

[...] generan terror e indefensión; ponen en peligro la integridad física y psicológica y dejan a la víctima en tal situación emocional que es incapaz de afrontarla con sus recursos psicológicos habituales (Echeburrua, Corral y Amor, 2002, citados por Echeburrua y Corral 2005, p.58)

Con lo cual emerge, entonces, la enfermedad mental.

A continuación se presentarán las categorías más frecuentemente usadas para describir la psicopatología asociada a fenómenos de trauma extremo como las violaciones graves a Derechos Humanos, especialmente tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes.

Inicialmente se expondrán brevemente las categorías diagnósticas desde el lenguaje técnico y más adelante se precisará respecto al significado e importancia que tienen en la evaluación forense de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Entre la sintomatología y los diagnósticos más comúnmente reportados en las víctimas se destacan: re-experimentación del trauma, evitación de eventos, lugares, personas e interacciones que recuerdan el hecho, angustia, disociación (distanciamiento temporal de la realidad), despersonalización (sentir extrañeza de su cuerpo o ambiente que le rodea), comportamiento atípico, quejas somáticas (malestar físico), disfunciones sexuales, psicosis (alteración del juicio de realidad), consumo de sustancias psicoactivas, daño neuropsicológico, trastorno depresivo, trastorno de estrés postraumático, cambios de personalidad duraderos, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno de estrés agudo, trastorno somatomorfo (manifestaciones de enfermedad física generadas por el trauma psicológico) y fobias específicas (miedos intensos) (ONU, 2001. p. 86-96 & UNODC y OACNUDH, 2009. p. 145-151 & IRCT, 2007. p. 26-31).

Este abanico técnico, cuyas definiciones detalladas no se precisan para los fines de la presente investigación, básicamente se concentra en patologías relacionadas con el predominio de la ansiedad (inquietud e incertidumbre), la depresión (decaimiento del estado de ánimo) y cambios de conducta, algunos de carácter permanente.

El uso de estas clasificaciones le permite al perito comunicar sus hallazgos desde el rigor de un marco técnico ampliamente difundido y estandarizado que puede ser sujeto a verificación; no obstante, como lo hemos señalado a lo largo del presente capítulo, las afectaciones en la salud mental de las víctimas no pueden ser categorizadas exclusivamente desde el modelo salud – enfermedad.

Es importante tener en cuenta que estas categorías diagnósticas no son una camisa de fuerza para la documentación de las afectaciones que pueda encontrar el perito en su evaluación, y que su uso exclusivo y excesivo al momento de fundamentar el caso puede llegar a entregar al operador de justicia una visión reduccionista de las reales causas y consecuencias de la violencia sufrida por las víctimas.

En este punto cabe señalar que si bien el peritaje psicológico busca como objetivo principal establecer cuáles son las afectaciones sufridas por las víctimas, también arroja luces a la comprensión del contexto en el cual se suscitaron los hechos, pues a través de los relatos de las personas afectadas es posible comprender las condiciones que favorecieron el desencadenamiento y perpetuación del clima de violencia imperante en su comunidad, por ejemplo, las estructuras de poder de los grupos armados, las condiciones previas de vulnerabilidad y la imposibilidad de hacer frente a un escenario de extrema violencia.

3.3.2 Efectos psicosociales

Las consecuencias psicosociales sufridas por las víctimas ponen en riesgo su capacidad para desarrollarse en sociedad, vulnerando sus derechos fundamentales y los de sus familias, dado que:

[...]la existencia de sentimientos de culpa dentro de las familias víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos genera una destrucción de los lazos afectivos, generando la reproducción del caos social. (Corte

Constitucional, T-418, 2015. p.51).

Específicamente, respecto a los efectos psicosociales de la experiencia traumática, la literatura especializada ha documentado que entre las afectaciones más frecuentes en las víctimas de violencia sexual en contextos de violencia sociopolítica se destacan: vulnerabilidad para el afrontamiento de situaciones de crisis, ruptura emocional con su identidad, cambios en la relación con el cuerpo, privatización u ocultamiento del sufrimiento por temor a no ser comprendidas o ser señaladas, vivencias de estigmatización, atribución de culpa por los hechos, dificultades para el establecimiento de relaciones de pareja estables, pérdida de la confianza y credibilidad en el Estado y sus instituciones, alejamiento de las actividades de liderazgo social (Morales, 2012. p. 7-12); ruptura de los lazos de arraigo con su comunidad, transmisión de los efectos del trauma a las futuras generaciones (transmisión transgeneracional del trauma), sensación de pérdida del proyecto de vida (AVRE, 2011. p.2-5); temor a la libre expresión, aislamiento social, dificultad para conectarse con sus hijos (Deutsch, 2007. p. 115-119); sensación de pérdida del control sobre la propia vida, menoscabo de la empatía, fractura de los referentes de seguridad como las creencias de invulnerabilidad, confianza en otros y carácter controlable y predecible del mundo (Gómez, 2009. p.21-22).

Es común que para evitar nuevos ataques, las personas víctimas se desplacen forzosamente de su lugar de origen, sufriendo el abandono y muchas veces el rechazo familiar (MSF, 2014. p. 9); este es un aspecto importante a considerar en la evaluación psicosocial del daño.

Las categorías de afectaciones precitadas se presentan a manera de orientación respecto a lo documentado por la literatura especializada, por lo

cual no se ahonda más adelante en cada una de ellas.

Es de anotar que las afectaciones citadas se plantean en consonancia con los aspectos psicosociales del concepto de salud mental, pues abordan temas como la sensación de seguridad, la previsibilidad del futuro, el control sobre las propias acciones, la dignidad de las víctimas, su capacidad para adaptarse a las adversidades y los recursos de afrontamiento de los que dispone.

A manera de conclusión, en el presente capítulo ha sido expuesto el marco teórico-conceptual a partir del cual idealmente se debe elaborar una prueba pericial de acuerdo al enfoque psicosocial del daño en la evaluación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Es importante tener en cuenta los aspectos aquí presentados puesto que una adecuada práctica forense contribuye a la superación de la impunidad ya que a través de la prueba pericial se posibilita la investigación de los hechos, la sanción de los responsables y la reparación de las víctimas.

Siendo conscientes de la importancia que representa la experticia forense para la justicia y las víctimas, en el siguiente capítulo se analizan los lineamientos de actuación pericial que actualmente rigen la labor forense en el área de la psicología tanto a nivel nacional como internacional en casos relacionados con la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

El análisis se realiza desde una perspectiva crítica a la luz del marco jurídico, el enfoque psicosocial, el concepto de salud mental y de daño que han sido desarrollados hasta el momento en el presente documento.

Capítulo iv

4. Análisis crítico de los reglamentos técnicos vigentes para la práctica psicológica forense en la evaluación de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado

Actualmente en Colombia no se cuenta con un reglamento técnico de carácter normativo específico para la evaluación psicológica forense de víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, razón por la cual, este tipo de evaluaciones se realizan siguiendo los lineamientos internacionales contenidos en el protocolo de Estambul (Organización de Naciones Unidas, 2001), y los nacionales contenidos en el protocolo de evaluación básica en psicología y psiquiatría forenses (Barrera, et al. 2009), la guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico, con fines de indemnización, conciliación o reparación (Falla, et al. 2011), y la guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales (Sarmiento, et al. 2013).

Estos últimos forman parte del Sistema nacional de medicina legal, son documentos oficiales y fueron publicados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Los reglamentos técnicos son objeto de análisis en el presente capítulo de cara a los aspectos desarrollados en los capítulos previos, donde se arrojan luces respecto a los contenidos esperados en un reglamento forense para la documentación de la evidencia psicológica dentro de la investigación judicial de la violencia sexual contra las mujeres con ocasión del conflicto armado.

De acuerdo a lo planteado en los capítulos anteriores resulta aconsejable,

para la autora, que un reglamento técnico adecuado para la evaluación pericial de los casos que ocupan a la presente investigación cuente con los siguientes tres parámetros:

Primero. Un marco normativo que contenga la base jurídica que fundamenta la labor pericial en el tema que nos ocupa; donde se incluyan los estándares de producción y apreciación de la prueba pericial, el derecho interno y el derecho internacional de los Derechos Humanos, los cuales han sido documentados en los dos primeros capítulos de este texto. Es pertinente que una Guía para la evaluación de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado contenga información que le permita al perito enmarcar su análisis en consonancia con la norma jurídica.

Segundo. Un marco teórico-conceptual ampliamente documentado que desarrolle el concepto integral de salud mental, los enfoques de evaluación psicológica y psicosocial del daño y las diferentes tipologías de afectaciones documentadas por la literatura, que se consideran esperadas y frecuentes en mujeres víctimas de violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

Respecto al enfoque psicosocial, es deseable que una Guía para evaluar la violencia sexual dirigida hacia las mujeres en el marco del conflicto armado, cuente con parámetros de análisis explícitos, donde se le oriente al perito respecto a la manera adecuada de documentar sus hallazgos en función de las condiciones de vulnerabilidad de la mujer por su rol de género, de las particularidades del daño psicológico y psicosocial en función del contexto sociopolítico en el cual ocurren los hechos y de las limitaciones a la hora de patologizar el sufrimiento de las víctimas (esto ha sido desarrollado a lo largo del tercer capítulo de este texto).

Tercero. Pautas para el abordaje forense de la entrevista y el análisis de la información obtenida desde el enfoque psicosocial.

Estas pautas se traducen en las reglas básicas para la realización del peritaje y se enmarcan dentro lo abordado en el primer capítulo del texto haciendo referencia a la idoneidad profesional del evaluador del caso, la protección de la intimidad de la víctima, el entorno adecuado para la realización de la entrevista y finalmente la preservación y toma del testimonio.

Es esperado que un reglamento técnico para el abordaje del tema que nos ocupa cuente con unos lineamientos específicos donde se expliciten reglas claras respecto a la manera de abordar la evaluación.

El presente análisis se realiza mostrando inicialmente las generalidades de los reglamentos técnicos, seguido de una tabla que contiene la descripción del objetivo de la evaluación según el instrumento, el enfoque para la interpretación de hallazgos y la orientación de las conclusiones y recomendaciones; finalmente se señalan los aspectos a destacar en cada uno de los instrumentos a estudiar y se precisan las consideraciones pertinentes respecto a su utilidad en la práctica de la evaluación pericial de la violencia sexual contra las mujeres con ocasión del conflicto armado.

Adicionalmente se realiza una revisión del Protocolo internacional de documentación e investigación de violencia sexual en situaciones de conflicto armado (Commonwealth del Reino Unido, 2014), el cual, si bien no tiene un carácter normativo, se constituye en una publicación pertinente, de carácter internacional, con amplia difusión y aceptación por parte de organizaciones encargadas de abordar el tema en escenarios relacionados con la justicia.

Cabe señalar desde ya, que a la luz de los tres criterios de análisis

expuestos, y todo documentado en los tres capítulos anteriores, se encontró que los reglamentos técnicos vigentes se sugieren insuficientes para la valoración psicosocial del daño en los casos que ocupan la presente investigación; encontrándose un vacío en la práctica forense desde la disciplina de la psicología, que genera la imperiosa necesidad de construir un reglamento técnico específico para valorar la violencia sexual dirigida hacia las mujeres con ocasión del conflicto armado.

4.1. Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes

Este instrumento agrupa los lineamientos básicos internacionales para la documentación e investigación de la tortura, fue publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y está dirigido principalmente al personal médico, entre quienes se incluye “especialistas en patología, ciencia forense, psiquiatría, psicología, ginecología y pediatría” (Organización de Naciones Unidas, 2001. p. 44).

Si bien en Colombia no existe una norma explícita que indique que el Protocolo tiene un carácter vinculante, la obligatoriedad de su uso es implícita en vista del carácter internacional del mismo y en función de la recomendación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le hace al Estado en la sentencia del 12 de septiembre de 2005 en el caso Wilson Gutiérrez Soler Vs Colombia, donde estima que para la práctica forense en casos relacionados con violaciones graves a Derechos Humanos el Estado debe tener en cuenta

dentro de la practica pericial las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul (p.53).

Según el Protocolo, la utilidad de la prueba técnica es aplicable principalmente a contextos legales como: la identificación de los agentes responsables de la tortura, el apoyo a solicitudes de asilo y la averiguación de prácticas regionales de tortura. Adicionalmente, y en segunda medida, plantea que la prueba puede usarse “como base para identificar las necesidades terapéuticas de los supervivientes y como testimonio en las investigaciones de derechos humanos” (Naciones Unidas, 2001. p. 47).

El Protocolo cuenta con seis capítulos donde ilustra al perito respecto a: las normas jurídicas internacionales aplicables a la evaluación, los códigos éticos pertinentes para la práctica de la prueba, las finalidades de la investigación legal de la tortura, las consideraciones generales relativas a las entrevistas y un recuento de los posibles hallazgos forenses en la víctima (señales físicas y psicológicas frecuentes en este tipo de casos).

4.1.1. Aspectos a destacar

Además de la suficiencia con que el Protocolo se detiene en la explicación de la norma internacional aplicable desde el Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos, y los componentes de la evaluación pericial en cada uno de sus capítulos, se destaca que contiene un apartado denominado “tortura sexual, incluida la violación”, donde orienta al perito acerca de las posibles consecuencias psicológicas en las víctimas, ilustrando respecto al impacto que pueden llegar a tener conductas distintas a la violación tales como

las amenazas verbales, burlas sexuales y desnudez forzada.

En este acápite del Protocolo se hace una distinción desde el enfoque diferencial acerca del impacto de la violencia sexual en hombres y en mujeres, profundizando en los aspectos culturales del rol de género.

Por otro lado, respecto al campo de la psicología, el Protocolo plantea que uno de los objetivos de la evaluación se encamina hacia la validación del testimonio de la víctima en relación con el hecho alegado (ver tabla 1). En este sentido la prueba pericial psicológica apoya el relato de la víctima (el cual en ocasiones es la única prueba dentro del proceso), respaldando su testimonio a través de la explicación técnica de la consistencia y coherencia del relato, así como la correspondencia de los hallazgos forenses con lo esperado en una persona que ha sido expuesta a violencia sexual.

Tabla 1. *Ejes de la evaluación psicológica forense según el Protocolo de Estambul*

Contenido	Enfoque
Objetivo	“determinar el grado de coherencia que existe entre el relato que el individuo hace de la tortura y la señales psicológicas que se observan en el curso de la evaluación” (Naciones Unidas, 2001. p. 97).
Enfoque para la interpretación de hallazgos	“A. Correlacionar el grado de concordancia entre los signos psicológicos observados con los hechos de tortura descritos. B. Evaluar si los signos psicológicos observados son reacciones esperables o típicas frente al estrés extremo dentro del contexto cultural y social del sujeto. C. Señalar el estado del sujeto en la evolución fluctuante a lo largo del tiempo de los trastornos mentales relacionados con los traumas; es decir, cuál sería el marco temporal en relación con los hechos de tortura y en qué punto del proceso de recuperación se

encuentra el sujeto. D. Identificar todo factor estresante coexistente que actúe sobre el sujeto (por ejemplo, persecución mantenida, migración forzada, exilio, pérdida del papel familiar y social, etc.), así como el impacto que esos factores puedan tener sobre el sujeto". E. Mencionar las condiciones físicas que pueden contribuir al cuadro clínico, en particular en lo que respecta a posibles signos de traumatismo craneal sufrido durante la tortura o la detención" (Naciones Unidas, 2001. p. 136).

<i>Orientación de las conclusiones y recomendaciones</i>	<p>"1. Exponer la opinión personal sobre la concordancia que existe entre todas las fuentes de información antes mencionadas (hallazgos físicos y psicológicos, información histórica, datos fotográficos, resultados de las pruebas de diagnóstico, conocimiento de las prácticas regionales de tortura, informes de consultas, etc.) y las quejas de torturas y malos tratos. 2. Reiterar los síntomas y discapacidades que sigue padeciendo el sujeto como resultado del presunto maltrato. 3. Formular recomendaciones sobre nuevas evaluaciones y cuidados al sujeto" (Naciones Unidas, 2001. p. 137).</p>
--	---

Nota. Elaboración propia.

En este punto es importante precisar que la validación del testimonio se distingue de la evaluación de la credibilidad del relato, la cual hace referencia a especificar a través del concepto técnico si la persona miente o no, dentro del proceso judicial, o si lo referido corresponde a un hecho real o a un hecho falaz o fantasioso; situación que al tratarse de la violencia sexual en el marco del conflicto contraviene los principios aplicables a las pruebas periciales como las reglas de procedimiento y prueba de la CPI expuestas en el primer capítulo del presente documento, y las observaciones hechas por la Corte Constitucional a la Fiscalía General de la Nación a través de su auto 009 de 2015, donde la Corporación se pronuncia específicamente frente a lo inadecuado de las

prácticas probatorias para establecer veracidad de testimonio, manifestando que ello es un obstáculo para la investigación y una vulneración de la dignidad de las víctimas, hecho que contraviene el derecho internacional de los Derechos Humanos.

4.1.2. Consideraciones respecto a la utilidad

Respecto al uso del Protocolo de Estambul para la evaluación de mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado, es importante anotar que si bien es pertinente para el abordaje de este tipo de casos, ya que facilita la investigación penal de los responsables, permitiendo identificar testigos, obtener sus declaraciones, y determinar la causa, modo, tiempo y lugar de los hechos, dando sentido a la obligación estatal reforzada de investigarlo los hechos con la debida diligencia (Rosendo Cantú, párr. 178), resulta insuficiente para la documentación del daño psicosocial en las mujeres víctimas, debido principalmente a que es un reglamento técnico dirigido hacia el personal médico, donde predomina el modelo salud-enfermedad tanto en la valoración del daño como en la documentación de los hallazgos forenses dentro del informe pericial.

Una de las limitaciones importantes del Protocolo se relaciona con la definición de tortura sobre la cual se fundamenta, pues se basa en la adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, donde, además de considerar la intencionalidad y la finalidad de los malos tratos, toma en cuenta al autor de los hechos, señalando que este debe ser “un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” (Art. 1); esta definición se constituye en una limitante dado que puede llegar a condicionar el enfoque de la evaluación al no tomar en cuenta que en escenarios de violencia sociopolítica como el conflicto armado el autor de los hechos no es necesariamente un agente del Estado o alguien que actúe bajo su amparo.

Por último, en el punto pertinente a la descripción de las secuelas psicológicas de la tortura (p. 88-96), el Protocolo describe un amplio conglomerado de síntomas y trastornos mentales de acuerdo a las clasificaciones internacionales de los manuales diagnósticos (DSM V y CIE 10), predominando la concepción del daño desde la perspectiva de la psicopatología, es decir en su dimensión intrapsíquica o psicológica, sin que se encuentren perspectivas que hagan alusión a consecuencias de orden psicosocial como hallazgos posibles de la victimización, y, aunque el exilio es un escenario donde tiene cabida la evaluación con enfoque psicosocial, el protocolo no desarrolla dicho enfoque de manera explícita, de modo tal que pueda guiar al perito hacia la consideración de este punto de vista en su análisis.

4.2. Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses

El Protocolo fue publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2009 y está dirigido a todos los profesionales del área de psicología y psiquiatría de Colombia encargados de realizar una pericia en cualquier contexto judicial. Tiene carácter normativo y se presenta como un reglamento técnico general exclusivo para el área de psicología y psiquiatría forenses.

Contiene la descripción de los procesos y procedimientos de evaluación pericial, que van desde los preparativos previos a la entrevista hasta la elaboración del informe (Barrera, et al. 2009. p. 9).

Cuenta con apartados donde señala la normatividad colombiana aplicable e ilustra al perito respecto al objetivo de la evaluación forense. Describe el procedimiento básico de evaluación, segmentado en actividades entre las que incluye la recepción y citación de la persona evaluada, los parámetros para el estudio de la documentación disponible para la evaluación, las condiciones ideales para la entrevista y finalmente los elementos a tener en cuenta para la elaboración del informe pericial.

Tabla 2. *Ejes de la evaluación psicológica forense según el Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense*

Contenido	Enfoque
<i>Objetivo</i>	“Elaborar un informe pericial o dictamen que contenga la historia clínica completa, examen mental, diagnóstico clínico positivo o negativo y un diagnóstico forense que auxilie el trabajo de la justicia” (Barrera, et al. 2009. p. 33).
<i>Enfoque para la interpretación de hallazgos</i>	“De acuerdo al caso, el análisis forense puede contener: • Descripción del funcionamiento psicológico de la persona entrevistada que puede ser hecha mediante los rasgos de personalidad predominantes, su nivel de adaptación, la descripción de su funcionamiento, los mecanismos de defensa o modelos de afrontamiento utilizados, o una formulación psicodinámica, que permitan una visión global del sujeto que se examina. • Descripción semiológica, es decir los signos y síntomas positivos o negativos del examinado durante los hechos investigados, en su historia de vida y al momento de la evaluación. • Formulación de

un diagnóstico clínico, que puede hacerse apoyado en las clasificaciones nosológicas internacionales vigentes como el DSM o la CIE o mediante la descripción de la sintomatología clínica si el cuadro no es enmarcable en un diagnóstico contenido en dichas clasificaciones” (Barrera, et al. 2009. p. 36).

<i>Orientación de las conclusiones y recomendaciones</i>	“El perito concluye el informe pericial respondiendo sistemáticamente las preguntas del cuestionario que motivó la evaluación”. “El perito en las conclusiones también resaltaré los hallazgos que considera de ayuda para la autoridad y para el examinado, tales como remisiones y sugerencias” (Barrera, et al. 2009. p. 36).
--	--

Nota. Elaboración propia

4.2.1. Aspectos a destacar

El Protocolo es explícito respecto los procesos y procedimientos que deben ser llevados a cabo por el/la perito durante la práctica de su examen, desde la recepción del caso hasta la elaboración del informe. Esto permite al galeno orientarse en circunstancias específicas que frecuentemente se presentan durante cada una de las etapas de la evaluación, como por ejemplo la toma del consentimiento informado o la utilización de intérpretes.

Al tener un carácter normativo dentro de su contenido, el Protocolo establece los estándares mínimos con los que debe contar un peritaje en el país, de este modo la labor forense está sujeta a un protocolo estandarizado y validado, que permite tener claros los parámetros de la calidad de la prueba técnica.

4.2.2 Consideraciones respecto a la utilidad

El Protocolo se sugiere insuficiente para la evaluación de mujeres víctimas de violencia sexual en conflicto armado por las siguientes razones:

La aplicación del Protocolo demanda el uso de Guías complementarias dependiendo del tipo de proceso judicial en el que es pertinente la evaluación forense. Actualmente la Guía para la evaluación de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado no se encuentra construida, por lo tanto no existen unos lineamientos específicos para complementar el contenido general del Protocolo.

El uso sin este tipo de Guía limita la evaluación a los estándares básicos de la práctica pericial, sin profundizar en aspectos particulares que son necesarios, y que van desde el marco jurídico aplicable, hasta las orientaciones teóricas respecto al abordaje de la violencia sociopolítica; incluyendo los aspectos en los cuales el perito debe centrar su evaluación y la manera como el perito puede interpretar los hallazgos.

Como es evidente en la tabla número dos, el enfoque de interpretación de hallazgos y evaluación se ajusta al modelo médico, pues se centra en que el perito debe hacer una descripción de signos y síntomas clínicos de acuerdo a las clasificaciones internacionales de la enfermedad mental, dejando de lado enfoques alternativos de interpretación como el enfoque psicosocial, y enfoques de abordaje distintos al clínico, como lo es el enfoque de género y el enfoque de derechos.

4.3. Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico, con fines de indemnización, conciliación o reparación

Esta Guía fue publicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y es complementaria del Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses; tiene un carácter normativo, es decir, es de obligatorio cumplimiento, y actualmente se encuentra vigente en su segunda versión.

La primera versión fue elaborada en el año 2009 en el marco de la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, atendiendo la necesidad de la prueba técnica en procesos donde se contempla la indemnización integral, la extinción de la acción penal y la conciliación preprocesal. En su segunda versión (2011) se amplió el alcance de la guía a casos de violencia sociopolítica cuando el proceso se encamina hacia la reparación individual en el marco de la ley 975 de 2005 y la ley 1448 de 2011.

En su contenido, la guía cita el ordenamiento legal colombiano que sustenta la práctica de la pericia de daño psíquico; incluyendo la Carta Política de 1991 y las leyes: 599 de 2000, 600 de 2000, 906 de 2004, 1395 de 2010, 975 de 2005 y 1448 de 2011.

Desarrolla un marco teórico general donde discute el fundamento jurídico de la pericia, e incluye consideraciones forenses respecto al concepto de daño psíquico; y además orienta acerca del desarrollo y descripción del procedimiento de peritación señalando las pautas recomendadas para la evaluación, análisis y formulación de conclusiones forenses.

Tabla 3. *Ejes de la evaluación psicológica forense según la Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico, con fines de indemnización, conciliación o reparación*

Contenido	Enfoque
<i>Objetivo</i>	“Establecer si la víctima de un hecho punible presenta un cuadro de sintomatología mental derivado de aquel, que pueda considerarse daño psíquico, con el fin de orientar a la autoridad en la búsqueda del restablecimiento del estado previo de la persona” (Falla, et al. 2011. p. 17).
<i>Enfoque para la interpretación de hallazgos</i>	“La pericia está centrada en determinar si la persona presenta sintomatología psíquica significativa derivada del delito o hecho del que fue víctima y establecer el pronóstico, el tratamiento recomendado y su duración, para que la autoridad propenda por su reparación [...] Los diagnósticos clínicos a los que generalmente se puede llegar como manifestaciones del daño psíquico corresponden a una amplia gama de la nosología psiquiátrica y se pueden catalogar dentro de las clasificaciones internacionales vigentes (DSM o CIE)”. (Falla, et al. 2011. p. 16-21)
<i>Orientación de las conclusiones y recomendaciones</i>	“Diagnóstico clínico individual nosológico o fenomenológico [...] Diagnóstico forense expresado en términos de si existe o no daño psíquico, su intensidad (leve, moderada, grave o profunda), duración de los síntomas y tipo de tratamiento recomendable (especificando modalidad, frecuencia y duración” (Falla, et al. 2011. p. 16-22).

Nota. Elaboración propia

4.3.1. Aspectos a destacar

El marco legal de la Guía destaca las principales normas de la justicia transicional, lo cual es un referente necesario para abordar una pericia de la naturaleza que nos ocupa. Dentro de este marco, la Guía menciona aspectos

relacionados con la reparación, refiriéndose a conceptos como la justicia restaurativa y destacando que el/la perito debe tener en cuenta que la reparación comprende acciones de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, lo cual es pertinente para el peritaje de la violencia sociopolítica.

4.3.2. Consideraciones respecto a la utilidad

Si bien la guía, en sus cuestiones preliminares respecto a su aplicabilidad señala que es útil para la evaluación forense en casos de violencia sociopolítica, al hacer una revisión detenida de su contenido se encuentra que resulta insuficiente para los fines de dicha evaluación, especialmente al tratarse de violencia sexual dirigida a las mujeres.

Pese a que la guía cita la Ley 975 de 2005 y la Ley 1448 de 2011 dentro del marco normativo, no hace alusión a los estándares internacionales en los cuales se fundamenta la justicia transicional, lo cual resulta importante en el peritaje de los casos que nos ocupa.

Dentro de la guía no se hace evidente la consideración de la perspectiva psicosocial del daño pues el marco teórico-conceptual se desarrolla alrededor de la definición de daño desde la perspectiva del modelo médico.

De cara a esta definición, la Guía orienta al perito para que documente los hallazgos forenses de su evaluación de acuerdo con las categorías diagnósticas de enfermedad mental incluidas en los manuales médico psiquiátricos vigentes, recomendando además el uso de términos predominantemente médicos (ver tabla 3).

Respecto a la utilidad de la Guía es importante señalar que al estar diseñada básicamente para la recomendación de medidas de reparación, se centra específicamente en la rehabilitación, dejando de lado la importancia de que el/la perito realice recomendaciones encaminadas hacia la restitución y las medidas de satisfacción, y no solo hacia el tratamiento psicológico o psiquiátrico que aparentemente necesitan las mujeres, quienes se presume, han sufrido un daño psíquico como consecuencia de la violencia sexual.

4.4. Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales

Al igual que los instrumentos anteriormente analizados, esta Guía es de obligatorio cumplimiento ya que tiene un carácter normativo; fue publicada en el 2013 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y es complementaria del Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses.

La Guía reseña un marco normativo donde hace alusión a la Constitución de Colombia, el Código penal y de procedimiento penal, las leyes 1257 de 2008, 1329 de 2009 y 1236 de 2008; hace referencia también a cuatro sentencias de la Corte suprema de justicia (25724 de 2006, 23290 de 2008, 24096 de 2006 y 32872 de 2010) y finalmente cita el auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional.

El marco teórico de la guía desarrolla conceptos básicos sobre violencia sexual en adultos, y el fundamento jurídico de los delitos contra la integridad, libertad y formación sexual, haciendo énfasis en el concepto jurídico de

incapacidad de resistir.

En su parte final orienta al perito respecto a la estructura del análisis y las conclusiones forenses pertinentes en este tipo de experticias.

Tabla 4. *Ejes de la evaluación psicológica forense según guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales*

Contenido	Enfoque
<i>Objetivo</i>	“determinar su estado mental antes, durante y después de los hechos investigados, con el fin de orientar a la autoridad sobre el uso de violencia psíquica durante los hechos, si la víctima estaba o fue puesta en condiciones que le alteraran, o no, su capacidad de comprender y/o consentir, y si existen alteraciones que puedan ser consideradas como consecuencia de los hechos investigados [...] Respecto a las finalidades de la evaluación, considerar que la evaluación psicológica es útil para solicitudes de asilo político, para entender las practicas regionales de violencia sociopolítica, para identificar las necesidades de reparación integral de las personas víctimas y como prueba en investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos” (Sarmiento, et al. 2013. p. 46 - 47).
<i>Enfoque para la interpretación de hallazgos</i>	“considerar el concepto de daño como secuela derivada de la exposición a violaciones graves a Derechos Humanos en el contexto de la violencia sociopolítica y no como el resultado de la exposición a lesiones físicas o delito sexual. Comprender que desde la perspectiva de los Derechos Humanos el fin de la pericia es orientar hacia la reparación y reconocimiento del daño individual y psicosocial de la persona examinada, no hacia la valoración probatoria del relato de las personas víctimas (lo anterior es una prohibición expresa por el derecho internacional), ni tampoco se limita a la documentación de un diagnóstico clínico-forense en términos de presencia o ausencia de

	enfermedad mental según las categorías nosológicas contenidas en los manuales internacionales de diagnóstico” (Sarmiento, et al. 2013. p. 50).
<i>Orientación de las conclusiones y recomendaciones</i>	“anotar si el examinado presenta signos o síntomas sugestivos de una alteración mental, especificando el diagnóstico según las clasificaciones nosológicas vigentes o haciendo una descripción semiológica...si se constituye en sintomatología psíquica presentada como respuestas adaptativa a los hechos ...especificar de manera descriptiva, si la víctima al momento de los hechos tenía sintomatología que le alterara, o no, su capacidad para rechazar u oponerse y/o comprender la actividad sexual ...hacer recomendaciones terapéuticas”.

Nota. Elaboración propia

4.4.1. Aspectos a destacar

La guía hace alusión a la violencia sexual dirigida hacia las mujeres en el marco del conflicto armado, en sus partes destacadas incluye una serie de definiciones respecto a temas como: actividad sexual, derechos sexuales y reproductivos, libertad sexual, y violencia sexual; estas definiciones buscan proporcionarle al perito conceptos básicos relacionados con el tema desde la perspectiva médico- psicológica y social (Sarmiento, et al. 2013. p. 8).

En el marco teórico-conceptual se relaciona un acápite que hace referencia específicamente a la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Con base en el Auto 092 de 2009 y los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma desarrolla el concepto de tortura e ilustra respecto a las diferentes formas de violencia sexual dentro del contexto del conflicto.

En sus partes pertinentes, la Guía recomienda al perito hacer uso del enfoque diferencial para la documentación de los hallazgos, haciendo énfasis en que estos no deben limitarse a la inclusión de diagnósticos clínicos de enfermedad mental, si no que el análisis del caso debe contener aspectos relacionados con las condiciones de integración social y comunitarias de la persona víctima, el daño familiar, las re-significaciones del proyecto de vida, la pérdida de oportunidades, daños en la dignidad, en la salud y daño psicosocial (Sarmiento, et al. 2013. p. 50).

4.4.2. Consideraciones respecto a la utilidad

La guía en mención se sugiere útil para la evaluación psicológica forense de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. No obstante, es importante destacar que no es suficiente en sí misma para tal fin, por las razones que se exponen a continuación:

La guía incluye una serie recomendaciones generales para la entrevista con fines de evaluación forense en víctimas de delitos sexuales con ocasión del conflicto armado, enfatizando en que la violencia sexual debe ser abordada desde una perspectiva amplia debido a que se trata de una violación grave a los Derechos Humanos. Pese a ello no explicita información respecto a las condiciones en las cuales se debe desarrollar la entrevista (privacidad, seguridad y confianza), no aborda temas relacionados con la preparación y técnicas de entrevista recomendadas de acuerdo a las necesidades de cada caso en particular (enfoque diferencial) y a los tópicos que son necesarios abordar para la documentación del caso, no alude a las condiciones de guarda

y preservación del testimonio, ni a la información que debe dársele a la víctima previo a la evaluación durante la toma del consentimiento informado, donde es menester clarificarle los alcances de la evaluación, los límites de la entrevista, los derechos que le subyacen en condición de víctima dentro del proceso y el contexto en el cual se realiza la evaluación.

La Guía señala la necesidad de que el/la perito tenga en cuenta el contexto en el cual se suscitan los hechos; sin embargo no especifica pautas claras respecto a la manera adecuada de construir un análisis de contexto que responda a las necesidades del caso teniendo en cuenta los escenarios de conflicto en que se desarrollaron los hechos, donde se incorporen recomendaciones en cuanto al tipo de información que debe ser incluida, y las fuentes externas al relato de la víctima que deben ser tenidas en cuenta, por ejemplo, notas de prensa, informes de organizaciones de Derechos Humanos, jurisprudencia, etcétera. La construcción de un análisis de contexto amerita un acápite exclusivo y ampliamente desarrollado dentro de la Guía.

El documento analizado señala de manera acertada que el perito debe abstenerse de emitir conclusiones o conceptos relacionados con la validez probatoria del relato de la víctima durante la entrevista; sería importante que además de este señalamiento se hiciese precisión respecto a la diferencia entre validar el relato de la víctima y calificarlo desde los parámetros de credibilidad o veracidad.

En los acápites pertinentes dentro de la Guía se recomienda que la evaluación sea realizada por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales del área de la psicología, psiquiatría y medicina forense debido a que ello permite abordar el caso de una manera integral desde diferentes

miradas que resultan complementarias. Esta recomendación es válida si se trata de tener un abordaje forense integral, no obstante, por si sola resulta insuficiente, puesto que la Guía no hace claridad respecto a los parámetros de cualificación de la idoneidad de los evaluadores, lo cual se encuentra desarrollado en la Ley 1719 de 2004 (artículo 13, parágrafo 4), al rol desempeñado por cada uno de los profesionales dentro de la evaluación y la manera cómo intervienen desde su área de conocimiento en el proceso de entrevista.

Pese a que existen instrumentos, leyes y jurisprudencia donde se aborda de manera específica los parámetros relacionados con la prueba pericial de la violencia sexual dirigida hacia las mujeres con ocasión del conflicto armado, en su marco legal, la Guía no desarrolla la normatividad relacionada con el derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario; lo cual resulta necesario para que el perito pueda encuadrar su labor de acuerdo a los estándares internacionales de procedimiento y prueba.

Por otro lado, la Guía carece de alusión a la Ley 1719 de 2014, evidentemente en vista de que su publicación fue posterior, no obstante, resulta indispensable que un reglamento técnico que atienda las necesidades de la justicia en casos relacionados con la violencia sexual en el marco del conflicto armado incluya esta norma dentro de su marco normativo; se sugiere que esta norma sea incorporada y desarrollada dentro de la construcción de una Guía para la evaluación psicológica forense de la violencia sexual en el contexto que ocupa esta investigación.

Si bien la guía aborda temas relacionados con el enfoque diferencial y el enfoque psicosocial del daño, especificando que se hace necesario tener una

mirada que vaya más allá de la enfermedad mental, al hacer las recomendaciones respecto a las conclusiones que deben formularse en este tipo de casos no se encuentra una correspondencia entre los parámetros de análisis propuestos por la guía y los parámetros respecto a la formulación de conclusiones.

Esto no puede ser subsanado con la simple modificación de la guía ya existente o la inclusión de un ítem dentro de sus conclusiones que aluda a la documentación del daño psicosocial, principalmente debido a que el marco conceptual de la Guía se desarrolla en función de la mirada del delito sexual como un delito común, debido a que desde su base no fue diseñada para contemplar las particularidades del contexto de la violencia sociopolítica, lo cual demanda la imperiosa construcción de una guía específica y no simplemente la adición de acápites aislados a la Guía ya existente.

Las conclusiones y recomendaciones, tal y como se observa en la tabla número 4, siguen cifradas sobre el modelo médico, y se continúa demandando que el perito exprese los hallazgos de su experticia en términos de sintomatología clínica asociada a un diagnóstico específico de enfermedad mental de acuerdo a los manuales médico psiquiátricos vigentes.

Finalmente, se destaca que la guía hace énfasis en la pertinencia de recomendar medidas de rehabilitación y medidas de satisfacción, armónicas y complementarias entre sí, teniendo en cuenta la perspectiva de género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas de cada víctima (Sarmiento, et al. 2013. p. 55); al igual que en las observaciones anteriores es preciso anotar que esto se encuentra nombrado dentro de la guía resultando vago para el entendimiento del perito, puesto que no se encuentra desarrollado

adecuadamente, luego no le permite al galeno encuadrar adecuadamente su labor.

4.5. Protocolo internacional de documentación e investigación de violencia sexual en situaciones de conflicto armado

Este instrumento contiene los estándares básicos de mejores prácticas para la documentación de la violencia sexual como crimen en el Derecho Internacional; fue desarrollado por la Mancomunidad del Reino Unido en conjunto con expertos y organizaciones de Derechos Humanos que han trabajado sobre el tema alrededor del mundo. Actualmente se encuentra disponible una versión en español de su primera edición, vigente desde el año 2014.

Pese a que el Protocolo no tiene un carácter vinculante para los Estados, se constituye en:

Una herramienta para ofrecer un mayor apoyo a los esfuerzos realizados por las/los profesionales en justicia nacional e internacional y derechos humanos para documentar de manera efectiva y protectora la violencia sexual. (Commonwealth del Reino Unido, 2014. p.6).

El Protocolo cuenta con dos partes, en la primera desarrolla el contexto internacional de la violencia sexual como crimen de guerra, explicitando el Derecho Internacional aplicable, y en la segunda establece una guía práctica para la planificación de la investigación, la identificación de víctimas y testigos,

la toma del consentimiento informado, la práctica de entrevistas y el almacenamiento de la información.

En su parte final, incluye una serie de formatos de fácil diligenciamiento para el registro de la información, y una serie de resúmenes respecto a los principios fundamentales y conceptos prácticos para la recopilación y salvaguarda de la información, incluyendo información respecto a la cadena de custodia, la realización de croquis y la toma de pruebas físicas.

Si bien este instrumento se encuentra dirigido principalmente al equipo investigador que realiza una labor criminalística y no específicamente para psicólogos, cabe resaltar que la información que brinda respecto a las directrices de entrevista forense son totalmente pertinentes para el área de la psicología, por ende aplicables a la labor pericial.

El Protocolo ilustra respecto a principios fundamentales y consejos prácticos esenciales para la entrevista forense, empezando por la orientación de las cuestiones preliminares (evaluación del riesgo, referentes de apoyo a las víctimas, conocimiento del contexto), tomando en cuenta los criterios deseados de entrenamiento y evaluación del personal evaluador, los preparativos previos a la entrevista, y las recomendaciones específicas para el inicio, intermedio y final de la entrevista; esta información no se encuentra contenida en la Guía analizada anteriormente y se considera altamente deseable en un reglamento técnico que oriente la entrevista forense en los casos que ocupan a la presente investigación, puesto que, como previamente se ha mencionado, la entrevista es el principal insumo para la práctica de la evaluación psicológica forense, y contar con una guía de entrevista representa para el perito un insumo para el ejercicio adecuado de su labor.

Respecto a los tres parámetros de análisis de los reglamentos técnicos a partir de los cuales se ha guiado la lectura crítica de los instrumentos previamente analizados, ha sido posible establecer que:

En cuanto al marco normativo pertinente, es claro que a pesar de que el estándar internacional y la norma local se encuentra ampliamente desarrollada, ningún instrumento orienta con detalle, especificidad y suficiencia el contenido de la base jurídica necesaria para encuadrar el peritaje dentro de la concepción de la violencia sexual como una forma de violación grave a Derechos Humanos, que ocurre en un contexto de violencia sociopolítica, es esperado que, gracias a las herramientas que le proporciona la Guía, el galeno se familiarice con el lenguaje de los Derechos Humanos.

En cuanto al marco teórico-conceptual, no es claro en ninguno de los instrumentos estudiados, la inclusión de conceptos como la salud mental vista desde la perspectiva psicosocial o alusión a un enfoque de evaluación distinto al modelo tradicional, el cual se orienta inevitablemente hacia la búsqueda de la psicopatología y no hacia la comprensión de los impactos psicosociales sufridos por las víctimas, los cuales han sido ampliamente documentados por la literatura especializada como fue evidenciado en el capítulo anterior.

Por último, y en cuanto a las pautas para el abordaje forense de la entrevista y el análisis de la información obtenida; ha sido evidente que los reglamentos técnicos no ofrecen un conjunto de indicaciones claras que provean una orientación que contribuya a la comprensión del tema en cuestión desde el enfoque psicosocial; tampoco proporcionan en su contenido unas reglas mínimas donde se le indique al perito cada uno los pasos a darse durante la evaluación, lo cual resulta indispensable para la una práctica forense

estandarizada.

A manera de cierre, se ha logrado establecer, luego del análisis de cada uno de los reglamentos técnicos vigentes para la evaluación de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que ninguno de los instrumentos se sugiere suficiente, siendo necesario que se promueva la construcción de un reglamento técnico que permita realizar una evaluación psicológica forense de acuerdo a los estándares normativos internacionales, a las necesidades de las víctimas dentro de su participación al interior de procesos judiciales y a la debida diligencia en la investigación de la violencia sexual.

En razón a este hallazgo, en el capítulo siguiente propone una serie de recomendaciones para la construcción de una Guía para la evaluación psicológica y psicosocial de la violencia sexual con ocasión del conflicto armado.

Capítulo v

5. Propuesta de lineamientos generales para desarrollar una Guía de evaluación psicológica forense con enfoque psicosocial de la violencia sexual dirigida hacia las mujeres con ocasión del conflicto armado

En concordancia con los hallazgos de esta investigación, luego del análisis crítico de los reglamentos técnicos vigentes y en vista de que actualmente en Colombia no se cuenta con una Guía forense específica para la evaluación psicológica forense de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, en el presente capítulo se formulan las recomendaciones generales para la construcción de la Guía.

Estas recomendaciones se incluyen en los cinco aspectos que se desarrollan a continuación: delimitación del objetivo de la pericia, marco normativo, marco conceptual, marco metodológico y especificación de los aspectos psicosociales del daño que deben ser tenidos en cuenta en el análisis de la información obtenida por el perito durante la evaluación.

5.1. Objetivo de la peritación

Es necesario que el reglamento técnico precise en su parte preliminar que aplica exclusivamente para la evaluación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado y que no es pertinente para la evaluación en contextos distintos (como los delitos comunes).

Hacer esta claridad deriva en que el galeno evite hacer uso de estándares de evaluación distintos que pueden llevar a que su opinión pericial resulte

exigua.

Se sugiere que dentro de esta parte, la Guía sea específica respecto a que, en este tipo de casos, pueden ser evaluados tanto las víctimas directas como sus familiares, cuando medie solicitud explícita por parte de la autoridad competente.

5.2. Marco normativo

Incluir el marco normativo internacional y nacional vigente aplicable dentro del reglamento técnico le permite al perito encuadrar su labor desde la perspectiva de derechos, aplicable al entendimiento de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

La documentación del marco normativo debe, además de citar la norma, mostrar a través de su explicación que cada ley no funciona de manera aislada, pues se trata de una normatividad interrelacionada que promueve el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, así pues, el marco normativo deberá mostrar que existen unos derechos generales de las mujeres, que se relacionan con los derechos de las víctimas en general y especialmente en el caso particular con los derechos que protegen a las mujeres víctimas en el contexto de la violencia sociopolítica, pues es ahí donde experimentan vulneraciones que derivan en impactos desproporcionados en razón de su género.

Es preciso que el marco normativo de la Guía contenga información jurídica específica aplicable a la prueba pericial, mostrando los estándares de toma y apreciación del testimonio, desarrollados por los organismos internacionales a

través de la jurisprudencia que fueron expuestos en el primer capítulo de esta investigación y que se concretan en los siguientes dos puntos:

Primero. Respecto a la toma del testimonio: **a).** La entrevista debe ser tomada bajo condiciones que observen la dignidad humana de la víctima en lugares seguros, cómodos, no intimidatorios y por intermedio de profesionales idóneos, preferiblemente con formación en Derechos Humanos. **b).** El testimonio debe ser preservado a través de medios idóneos como la transcripción literal del relato o la video grabación del mismo. **c).** El entrevistador deberá evitar la intrusión en la intimidad de la persona evaluada, así como la dirección de preguntas innecesarias y reiterativas donde la víctima deba narrar con detalles específicos de los hechos que previamente ha referido en diligencias judiciales dentro del proceso.

Segundo. Respecto a la apreciación del testimonio: **a).** La afectación psicológica persiste aunque no se documente evidencia de lesiones físicas en el momento de la evaluación. **b).** La declaración de la víctima es en ocasiones la única prueba de los hechos dentro de la investigación, por tanto se hace necesario respaldar el relato con conceptos psicológicos técnicos respecto a la consistencia interna de la declaración en relación al modo discursivo empleado por la víctima y a las afectaciones encontradas, lo cual no implica pronunciarse respecto al concepto de “veracidad del relato”. **c).** El galeno deberá abstenerse de realizar apreciaciones respecto a la inferencia del consentimiento de la víctima en consonancia con el artículo 18 de la ley 1719 de 2014 y el artículo 70 de las reglas de procedimiento de la Corte Penal Internacional.

5.3. Marco conceptual

Es preciso que la Guía para la evaluación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado cuente con un marco conceptual que desarrolle principalmente dos aspectos:

Primero. El concepto de salud mental desde la perspectiva psicosocial.

Segundo. El concepto de daño psicológico y daño psicosocial a partir de los cuales el perito formula los diagnósticos forenses al final de su evaluación. En este punto es pertinente que se enfatice en la necesidad de que ambas dimensiones del daño sean tenidas en cuenta como base de la opinión pericial, pues aportan la perspectiva de interpelación histórica y social de las consecuencias de los hechos, necesaria para evitar la patologización de las afectaciones sufridas por las mujeres víctimas.

La inclusión de estos ítems en el marco conceptual advierte al perito la necesidad de trascender el modelo médico dentro de su evaluación no limitándola al registro de diagnósticos clínicos de enfermedad mental como único hallazgo relevante dentro de la pericia.

5.4. Marco metodológico

Es necesario que en la Guía se describa claramente el procedimiento a seguir respecto a tres puntos en particular:

Primero. La construcción y análisis del contexto sociopolítico en el que ocurrieron los hechos, en este punto, se sugiere que la Guía especifique cuál es la información relevante a obtener del expediente del caso y de otras

fuentes como notas de prensa, registros de memoria histórica, sentencias judiciales, registros de las páginas oficiales de los entes estatales que den cuenta de los hechos en particular, o de las circunstancias en las cuales ocurrieron.

Esta información es relevante pues le permite al profesional forense ubicar los hechos en el escenario del conflicto armado, permitiéndole tener un panorama tanto de los tratos victimizantes recibidos por la víctima en particular como de la geopolítica del lugar de ocurrencia y las dinámicas de la violencia y del conflicto en la zona, es decir, si se sugiere participación, aquiescencia o tolerancia del Estado respecto al actuar de un grupo ilegal, si el grupo ilegal tenía control territorial, económico, político y social sobre la población, y a través de qué medios o mecanismos se lograba, si se presentaron situaciones de violencia extrema como asesinatos selectivos, inhumaciones ilegales, castigos físicos, extorsiones, apropiación de tierras, constreñimiento para votar, regulación y restricción de prácticas sociales, atentados contra la dignidad personal de los miembros de la comunidad, tortura, amenazas, detenciones, desplazamiento y trabajos forzados, irrupción indiscriminada en la propiedad privada, restricción del tránsito por la vía pública, masacres, constreñimiento para la realización de actos de servidumbre, y formas de violencia basada en género, si los hechos de violencia fueron dirigidos hacia la población civil de manera indiscriminada y si fueron de carácter público.

Segundo. La información relevante a obtener de la víctima durante la entrevista, donde se incluye: historia personal, familiar, laboral y psicosocial previa a los hechos, funcionamiento psicológico previo, modo de ocurrencia de los hechos, vivencia de los mismos, y consecuencias psicológicas y

psicosociales percibidas, vivencia de la vinculación dentro del proceso judicial y expectativas de reparación.

Tercero. La recomendación de pautas específicas para la entrevista forense, encaminadas a obtener la información relevante para la práctica de la pericia, evitando la revictimización y garantizando los derechos de las víctimas, donde se destaque principalmente la importancia de que el galeno actúe con sensibilidad ante la persona víctima, tome adecuadamente el consentimiento informado, y favorezca una narrativa libre donde evite el uso de preguntas sugestivas, inductoras de respuesta, incómodas o innecesariamente reiteradas para la persona examinada.

5.5. Aspectos psicosociales que deben ser incluidos en el análisis de la información obtenida durante la evaluación

En este último punto, se recomienda que un reglamento técnico para la evaluación psicológica forense de la violencia sexual dirigida hacia las mujeres con ocasión del conflicto armado, incluya consideraciones respecto a los aspectos psicosociales que deben ser evaluados y tenidos en cuenta en el momento de documentar las afectaciones y daños sufridos por las víctimas como consecuencia de la victimización.

Estos aspectos fueron desarrollados en el tercer capítulo del texto, no obstante se presentan en este acápite a manera de lista de chequeo, mostrando los puntos sobre los cuales es importante que el perito enfatice en su evaluación: vulnerabilidad para el afrontamiento de situaciones de crisis, ruptura emocional con su identidad, cambios en la relación con el cuerpo,

vivencias de estigmatización, dificultades para el establecimiento de relaciones de pareja, pérdida de la confianza y credibilidad en el Estado y sus instituciones, alejamiento de las actividades de liderazgo social, ruptura de los lazos de arraigo con su comunidad, transmisión de los efectos del trauma a las futuras generaciones, sensación de pérdida del proyecto de vida, aislamiento social, dificultad para conectarse emocionalmente con su familia y fractura de los referentes de seguridad, entre otros (ver capítulo tres).

Además de lo anterior se sugiere que la Guía especifique que es pertinente que el galeno tenga en cuenta en su evaluación y análisis aspectos como la previsibilidad, la seguridad, la dignidad y la capacidad adaptativa de la persona víctima.

Dentro de este mismo punto, la Guía debe incluir, en consonancia con la documentación de las afectaciones psicosociales sufridas por las víctimas, unas pautas generales para formular recomendaciones para la toma de medidas de reparación a favor de las víctimas, de acuerdo a los estándares internacionales y a lo contemplado en la normatividad colombiana vigente (rehabilitación, restitución y medidas de satisfacción principalmente) las cuales pueden ir encaminadas a mostrar los dos siguientes aspectos:

Primero. La necesidad de que la víctima sea objeto de intervención por el área de psicología dentro de un proceso terapéutico que: contribuya a que las experiencias de dolor disminuyan, trabajando con los efectos que se han producido a partir de la vivencia traumática, propicie la recuperación y desarrollo de los recursos personales que la vivencia traumática desestructuró, así mismo facilite a la víctima volver a vincularse de manera positiva con su entorno comunitario y abrirse nuevamente a la interacción con terceros,

especialmente en el plano sexoafectivo.

Segundo. La pertinencia del acompañamiento psicojurídico durante el proceso judicial o la inclusión dentro de programas psicosociales de participación en grupos de víctimas para la promoción de sus derechos. Este acompañamiento psicojurídico puede ir encaminado también a propender por que la víctima se visualice dentro del proceso como una persona sujeta de derechos entendiendo el significado del proceso judicial y su importancia social.

Conclusiones

La investigación desarrollada a lo largo de sus cinco capítulos permitió determinar que:

La práctica de la psicología forense no se encuentra al margen de los derechos fundamentales en la medida en que los mecanismos de producción y apreciación de la prueba se rigen por el marco normativo internacional y nacional de los Derechos Humanos, especialmente en el tema que ocupó la presente investigación.

En el ámbito nacional e internacional, no se cuenta con un reglamento técnico adecuado para la realización de peritajes psicológicos de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Esto deriva en que los profesionales de la salud mental que realizan este tipo de pruebas técnicas en Colombia se expongan a proferir actuaciones periciales limitadas, debido a que los reglamentos vigentes han sido desarrollados para abordar casos relacionados con la violencia común, y se basan en el modelo tradicional de evaluación (modelo médico), cuyo objetivo es documentar la presencia o ausencia de indicadores sugerentes de enfermedad mental como consecuencia de la exposición a un hecho victimizante dejando de lado el enfoque psicosocial del daño.

El uso de los reglamentos técnicos actualmente vigentes limita la comprensión y documentación de aspectos relevantes para la investigación judicial y la reparación de las víctimas, convirtiéndose de alguna manera en una barrera para la satisfacción de las garantías judiciales y el acceso a la justicia de las víctimas.

En consonancia con los Derechos Humanos de las mujeres víctimas, se

hace necesario que se construya un reglamento técnico que permita realizar la evaluación psicológica forense que apoye la investigación judicial, de acuerdo a los estándares internacionales del derecho y a las recomendaciones formuladas en el capítulo quinto de esta investigación.

Referencias

- Amenodarro, R., Conte, L., Del Do, A., Gonzáles, L., Gutman, R., Lenhardtson, E., Marmer, M., Peverelli, M., Sobredo, L., Wikinski, M., Guilis, G. (2007). *La reparación: acto jurídico y simbólico*. En Atención Integral a víctimas de tortura en proceso de litigio. Aportes psicosociales. Págs 277-320. San José. CR: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
- AVRE. (2011). *Impactos psicosociales en casos de violencia sexual en el marco de la violencia política. Intervención para el Tribunal simbólico contra la violencia sexual*. Recuperado de: http://www.humanas.org.co/archivos/Microsoft_Word_-Documento_Tribunal_Avre__2_.pdf. Consultada el día 1 de agosto de 2015.
- Martin-Baró, I. (1988). La violencia política y la guerra como en el país del trauma psicosocial en El Salvador. Revista de psicología de El Salvador. San Salvador: UCA editores.
- Barrera, J. D., Crespo, M. L., Tamayo, S. R., De la Hoz, N. E., Méndez, A. Carrasquilla, A., Roncallo, J. E., Parra, C. A., Jiménez, L. C., Guzmán, D. C. y Pérez, R. E. (2009). *Protocolo de evaluación básica en psiquiatría y psicología forenses*. Versión 01. Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Beristain, C.M. (2008). *Diálogos sobre la reparación. Experiencias en el sistema interamericano de derechos humanos*. Tomo 1. San José, CR: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Beristain, C.M. (2009). *Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en casos de violaciones a derechos humanos*. San José, CR: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Caicedo, L. P. Buenahora, N. Benjumea, R, A. (2009). *Guía para llevar casos de violencia sexual. Propuestas de argumentación para enjuiciar crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado*. Bogotá: Ediciones Antropos.

Castaño, B. L. (Sin fecha). *A propósito de lo psicosocial. (Documento inédito)*. Programa de iniciativas universitarias para la paz y la convivencia. Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: <http://www.piupc.unal.edu.co/catedra01/pdfs/berthacastano.pdf>. Consultada el día 3 de septiembre de 2015.

Centro de Atención Psicosocial de Peru – CAPS (2009). *De la clínica a la salud mental comunitaria. Apuntes del trabajo comunitario en salud mental en seis regiones del país*. Lima: Editorial ROEL S.A.C.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL. (2013). *La debida diligencia en la actuación del Ministerio Público Fiscal en casos de*

violencia de género. Buenos Aires: Eudeba.

Conferencia diplomática para elaborar convenios internacionales destinados a proteger a las víctimas de la guerra. (1949) *IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra*. Ginebra: Comité internacional de la Cruz Roja.

Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. (1977) *Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales*, 1977. Ginebra: Comité internacional de la Cruz Roja.

Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo internacional humanitario aplicable en los conflictos armados. (1977) *Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional*, 1977. Ginebra: Comité internacional de la Cruz Roja

Congreso Nacional de la República de Colombia (1991), *Constitución Política de Colombia*. Bogotá: Legis.

Congreso Nacional de la República de Colombia (2005, 25 de julio), *Ley 975 de 2015, por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que*

contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios, en Diario Oficial, núm.45.980, 25 de julio de 2005, Bogotá.

Congreso Nacional de la República de Colombia (2011, 10 de junio), *Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones*, en Diario Oficial, núm. 48.096, 10 de junio de 2011, Bogotá.

Congreso Nacional de la República de Colombia (2014, 18 de junio), *Ley 1719 de 2014, por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones*, en Diario Oficial, núm. 49.186, 18 de junio de 2014, Bogotá.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia, (2008, 14 de abril), “*Auto 092/08*”, Bogotá: M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia, (2015, 27 de enero), “*Auto 009/15*”, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, Bogotá.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia (2004, 22 de enero), “*Sentencia T-025/04*”, Bogotá: M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia (2010, 02 de febrero),
“*Sentencia T-045/10*, Bogotá: M.P. Maria Victoria Calle Correa.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia (2015, 03 de julio), *Sentencia T-418/15*. M.P. Bogotá: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia (2015, 10 de diciembre),
Sentencia C-754/15. M.P. Bogotá: Gloria Estela Ortiz Delgado.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia (2014, 22 de noviembre),
“*Sentencia C-867/14*, Bogotá: M.P. Mauricio Gonzáles Cuervo.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia (2015, 10 de diciembre),
“*Sentencia C-754/14*, Bogotá: M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia (2014, 26 de marzo),
“*Sentencia C-177/14*, Bogotá: M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

Corte Constitucional de la Republica de Colombia (2013, 7 de marzo),
“*Sentencia T-117/13*, Bogotá: M.P. Alexei Julio Estrada.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2008, 2 de agosto). *Caso del penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, interpretación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas*. San José de Costa Rica.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2010, 30 de agosto). *Caso Fernández Ortega y otros Vs. México, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas*. San José de Costa Rica.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2010, 31 de agosto). *Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas*. San José de Costa Rica.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2014, 19 de mayo). *Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas*. San José de Costa Rica.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, (2014, 20 de noviembre). *Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas*. San José de Costa Rica.

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. (2008) Resolución 1820. Organización de Naciones Unidas.

Mesa de seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional. 2013. *Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual. Quinto Informe de Seguimiento al Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional*. Bogotá: Ediciones Antropos Ltda.

Commonwealth del Reino Unido. (2014). *Protocolo internacional de*

documentación e investigación de violencia sexual en situaciones de conflicto armado. Estándares básicos de mejores prácticas para la documentación de la violencia sexual como crimen en el derecho internacional.

Recuperado de:

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/376552/low_res_PSVI_Protocol_FULL-es.pdf. Consultado el día 28 de febrero de 2016.

Deutsch, A. (2007). *Secuelas de la tortura en el individuo, la familia y la sociedad.*

Echeburrua, E. Corral, P. (2005). “¿Cómo evaluar las lesiones psíquicas y las secuelas emocionales en las víctimas de delitos violentos?” *Revista Psicopatología Clínica, Legal y Forense*, Vol. 5. p. 57-73. España: Sociedad española de psicología clínica, legal y forense y Sociedad española de psiquiatría forense.

Falla, J. V. Perea, I. Rojas, J. A. Villegas. V.E. Jiménez, I.A. Cárdenas, M.E, Berenguer, A. M. Garzón, C. D. Constantin, A. E. (2011). *Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico, con fines de indemnización, conciliación o reparación.* Versión 02. Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Fiscalía General de la Nación, (2016). *Resolución 01774, por medio de la cual adopta el Protocolo de investigación de violencia sexual y se establecen*

medidas para su implementación y evaluación.

Gómez, D. N. (2009). *Peritaje psicosocial por violaciones a derechos humanos.*

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Guatemala: F&G.

Guerrero, A. Lozano, N (2011). *Criterios orientadores para la evaluación*

individual por violencia sociopolítica. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Guzmán, D.E. (2012). *¿Reparar lo irreparable? Violencia sexual en el conflicto*

armado colombiano. Propuestas con perspectiva de género. Bogotá:

ONU Mujeres.

IRCT, Internacional Rehabilitation Council for Torture Victims. (2007). *La*

evaluación psicológica de alegaciones de tortura, una guía práctica del

protocolo de Estambul para psicólogos. Segunda Edición. Dinamarca:

Scanprint.

Llanos, M.T. Sinclair, A.C. (2011). *Terapia de reparación en víctimas de abuso*

sexual, aspectos fundamentales. Revista Psykhe, Vol. 10. No 2. Págs

57–70. Escuela de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la

Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile.

Médicos sin fronteras. MSF. (2014). *¿Y qué pasó con caperucita?* Recuperado

de:<http://www.msf.es/sites/default/files/adjuntos/Dossier%20MSF%20>

Violencia%20Sexual_Colombia_Nov20.pdf. Consultado el 28 de enero de 2015.

Monje, E. Trujillo, J. C. Luna, L. A. y Restreo, P. (2010). *El impacto psicosocial de las violaciones de derechos humanos en Ecuador. Consecuencias de las violaciones de derechos humanos, en las víctimas, sus familias y la sociedad. Informe de la comisión de la Verdad.* p. 320-439. Quito.

Morales, C. (2012). “Violencia sexual contra las mujeres: comprensiones y pistas para un abordaje psicosocial”. Revista *Notas en Clave de Psicología*. Vol. 1. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Moreno, G.A., y López, C.M. (2009). Enfoque psicosocial en la atención a la población desplazada, confinada o en riesgo. Guía práctica para Alcaldes y Alcaldesas. Ministerio de la Protección Social. República de Colombia.

Muñoz, J. Manzanero, A., Alcázar, M. A. González, J. L. Pérez, M. L, Yela. M. (2011). *Psicología Jurídica en España: Delimitación Conceptual, Campos de Investigación e Intervención y propuesta formativa dentro de la Enseñanza Oficial. Anuario de Psicología Jurídica.* Anuario de Psicología Jurídica Vol. 21 Págs. 3-14. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en Colombia – UNODC y Oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones unidad para

los derechos humanos – OACNUDH, (2009). Módulo para la investigación y documentación del crimen de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo al protocolo de Estambul. Bogotá: Editorial: Scripto.

Organización de Naciones Unidas. (2001). *Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes*. Oficina del alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos.

Organización Mundial de la Salud. (2006). Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Documentos básicos, suplemento de la 45a edición. Disponible en: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf co. Consultada el 7 de septiembre de 2015.

Organización de Naciones Unidas. Recomendación general No. 30 sobre las mujeres en la prevención de los conflictos, las situaciones de conflicto y postconflicto, 2013.

Organización de Naciones Unidas. Resolución 1960, 2010.

Organización de Naciones Unidas. *Pacto internacional de derechos civiles y políticos*, 1966.

Organización de Naciones Unidas. *Pacto internacional de derechos*

económicos, sociales y culturales, 1966.

Organización de Naciones Unidas. *Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer*, 1979.

Organización de Naciones Unidas. *Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional*, 1998.

Organización de Naciones Unidas. *Reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional*, 2000.

Organización de Naciones Unidas. *La norma de la debida diligencia como instrumento para la eliminación de la violencia contra la mujer. Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias*, 2006.

Organización de Estados Americanos. *Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José)*, 1969.

Organización de Estados Americanos. *Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belem do Pará)*, 1994.

Pacheco, G., Baltodano, C., Sasa, W., Long, S., y Rodríguez, V. (2009). *Atención integral a víctimas de tortura en proceso de litigio. Propuesta*

psicojurídica. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Rebolledo, O. Rondón, L. (2010). *Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial con víctimas individuales y colectivas en el marco del proceso de reparación. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas*. Revista de estudios sociales, Vol. 36. p 57-73. Bogotá: Facultad de ciencias sociales, universidad de los Andes.

Rondón, L. (2013). *Enfoque psicosocial. Directrices del enfoque psicosocial orientadas a los planes, acciones y programas de atención, asistencia y reparación a víctimas. Documento Resumen*. Versión 01.02.2013. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas. Colombia. Disponible en: http://www.unidadvictimas.gov.co/images/reparacion/Resumen_directrices_enfoque_psicosocial.pdf. Recuperado el 15 de agosto de 2014.

Sarmiento, R., Perea, I., Rojas, J. A., Apraez, G. E., y Berenguer, A. M. (2013). *Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en adultos víctimas de delitos sexuales*. Bogotá: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Tapias, S.A. (2004). Aproximaciones técnico tecnológicas para la evaluación de psicopatología en el medio forense. Revista colombiana de psicología, Vol.13, Págs. 50-56. Bogotá: Universidad El Bosque.

Tamayo, G., y Díaz-Guijarro, J. (2006). Justicia en falta. Evolución del marco jurídico internacional ante la violencia sexual bajo conflicto armado y desafíos para una justicia inclusiva de género. En: *Justicia y reparación para mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto armado interno*. Seminario internacional (pp. 49-106). Lima: Nova Print SAC.

Tkaczuk, J. (2001.) Daño Psíquico. Buenos Aires: Editorial Ad-hoc.

Turkcan, B., Schlar, C., y Kapkın, E. (2009). *La evaluación psicológica de alegaciones de tortura. Una guía práctica del Protocolo de Estambul para psicólogos*. Segunda edición. International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT). Viby-Dinamarca: Scanprint.